

# NOTAS SOBRE LAS RAÍCES HISTÓRICO-ESTRUCTURALES DE LA MOVILIZACIÓN POLÍTICA EN CHILE

ATILIO A. BORON\*

## I. INTRODUCCIÓN

EL TRIUNFO de la Unidad Popular en las elecciones presidenciales de septiembre de 1970 y la puesta en marcha, por parte del gobierno de Salvador Allende, de un vasto programa de transformaciones revolucionarias actualizaron vivamente las discusiones relativas a los problemas y perspectivas de una transición pacífica hacia el socialismo en Chile.<sup>1</sup> Con anterioridad a los comicios la mera posibilidad de la victoria electoral había sido considerada, por grupos muy influyentes dentro de la *intelligentzia* revolucionaria, como una ilusión que se desprendía de la incapacidad teórica para reconocer el carácter de clase del Estado chileno. Después de que las urnas revelaron que Allende se había impuesto, aunque por estrecho margen, a los otros dos candidatos, no tardaron en aparecer interpretaciones *post-factum* que pretendían explicar ese resultado en términos de insondables y enigmáticos “accidentes históricos” o apelando a otras fórmulas equivalentes de pensamiento mágico. Muchos intelectuales y facciones políticas de la

\* El autor quiere expresar su agradecimiento a Juan Durán, Nora Elichiry, Julio Faúndez, Guillermo D'Donell, Víctor Pérez-Díaz y Elisa Reiss por las valiosas críticas y comentarios que formularon sobre una versión preliminar de este trabajo. Demás está decir que las opiniones aquí vertidas son de exclusiva responsabilidad del autor.

<sup>1</sup> Vano sería el pretender citar de manera más o menos exhaustiva la enorme cantidad de libros, artículos y panfletos dedicados a escrutar y entender “la vía chilena”. Entre los más importantes publicados fuera de América Latina podríamos mencionar a los siguientes: Dale J. Johnson, ed., *The Chilean Road to Socialism*. Nueva York, 1973. Alain Labrousse, *L'expérience chilienne*. París, 1972. Gatherine Lamour, *Le pari chilien*. París, 1972. Maurice Najman, *Le Chili est preche*. París, 1974. Paul Sweezy and Harry Magdoff, *Revolution and Counterrevolution in Chile*. Nueva York, y Londres, 1974. Alain Touraine, *Viet et Mort du Chili Populaire*, 1973. J. Ann Zammit, *The Chilean Road to Socialism*. Sussex, 1973 (versión inglesa del seminario conjunto organizado por la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) y el Institute of Development Studies de la Universidad de Sussex y que tuvo lugar en Santiago, en marzo de 1972).

izquierda, tanto en Chile como en otros países, se han adherido a estas opiniones que, según nuestro entender, revelan una incompreensión alarmante de la especificidad histórica de la coyuntura política por la que estaba atravesando Chile en 1970. Un buen ejemplo de este tipo de interpretaciones es proporcionado por los ensayos de Régis Debray y Miles Wolpin, ampliamente difundidos en América Latina e igualmente ilustrativos de las deficiencias teóricas de la tesis que, con ligeras variantes, sustentan ambos autores.<sup>2</sup>

En su Introducción a *Conversación con Allende*, Debray procura presentar al lector un esquema de la evolución histórica chilena a fin de suministrar los antecedentes necesarios para comprender el intrigante carácter de la situación política imperante en las vísperas de la decisiva contienda electoral. Sin embargo, a pesar de su correcto propósito fracasa en su empresa por cuanto, luego de repasar los rasgos más sobresalientes de la evolución histórica nacional desde mediados del siglo XIX, concluye afirmando que, en el momento en que arreciaba la ofensiva de las masas populares, “*interviene uno de esos accidentes aparentemente irracionales de la Historia y que le sirven de ingrediente: la clase dominante se da el lujo costoso, como se ha dicho ya, de exhibir a la luz del día sus contradicciones y sus dramas ideológicos* dejando subsistir, al lado del representante del Orden, la Ley y la Paz en el hogar, a un vocero convencido de la vía no-capitalista de desarrollo y de la sociedad comunitaria, nutrido en encíclicas de Juan XXIII, en Maritain y en Emmanuel Mounier, al día con el resto del pensamiento contemporáneo”.<sup>3</sup> Y luego, más adelante en el diálogo con el presidente, persiste en su error al sostener que, para explicar el triunfo popular, “¡quizá habría que inventar una nueva ley de la historia —o una antiley— que sería la ley de las sorpresas!: *cuando sucede algo importante en la historia es siempre por sorpresa*”. Esta intervención del ensayista francés provocó la inmediata réplica de Allende, percatado de la errónea conclusión a que había

<sup>2</sup> Régis Debray, *Conversación con Allende*. México, 1971. Miles Wolpin, “La izquierda chilena: factores estructurales que dificultan su victoria electoral en 1970”, *Foro Internacional*, julio-septiembre de 1968. Este trabajo fue reproducido en *Pensamiento Crítico*, mayo de 1969, con el siguiente título: “La izquierda chilena: factores estructurales que impiden su victoria en 1970.” En Chile, la revista *Punto Final* en su edición número 88 de septiembre de 1969 reprodujo el artículo tal como fuera publicado por una revista de La Habana. Miles Wolpin, “La influencia internacional de la Revolución cubana: Chile, 1958-1970”, en *Foro Internacional*, abril-junio de 1972, pp. 453-496.

<sup>3</sup> Debray, *op. cit.*, pp. 37-38. Obviamente, el candidato del “Orden, la ley y la paz en el hogar”, era Jorge Alessandri. Su oponente era Radomiro Tomić. (Subrayado nuestro.)

llegado su interlocutor: "Por sorpresa, no. Sobre las *condiciones de fondo* inciden circunstancias particulares y temporales."<sup>4</sup>

En esta misma perspectiva "accidentalista" hallamos dos ensayos de Miles Wolpin, uno de los cuales —publicado dos años antes de las elecciones presidenciales de 1970— adquirió notoria difusión dentro de la izquierda. En dicho trabajo Wolpin enunciaba meticulosamente todos los factores que, a su juicio, impedirían el triunfo de los partidos populares en las próximas elecciones presidenciales: el control de la burguesía sobre los medios de comunicación de masas; el papel anticomunista de la Iglesia católica; la abismante desigualdad existente en los recursos financieros disponibles para las campañas electorales; el empleo de las prerrogativas y facilidades del gobierno con fines electorales; la autoridad del Congreso para elegir al presidente en caso de que ninguno de los candidatos hubiese obtenido mayoría absoluta; la probabilidad de la intervención militar; la extensión y variedad de las injerencias de los Estados Unidos en el sistema sociopolítico "abierto" de Chile y la existencia de fuertes prejuicios anticomunistas en la opinión pública. El efecto conjunto de todos estos factores obraría como una barrera insalvable para las aspiraciones electorales de la izquierda.<sup>5</sup> Ahora bien, una vez conocidos los resultados de los comicios que —para asombro de algunos intelectuales y desconsuelo de la burguesía— proyectaron a Salvador Allende y al movimiento popular chileno a las alturas del aparato estatal —aun cuando el control que se tenía del mismo era más bien precario— un segundo ensayo de Wolpin justificaba la bondad de sus análisis anteriores argumentando que la victoria de la Unidad Popular se debió al "*exceso de confianza, los malos cálculos y la desunión de los burgueses*". Una serie de "factores fortuitos" —tales como la arrogancia de Frei, el excesivo entusiasmo de Tomic, amén de otros por el estilo— debilitaron y dividieron a la burguesía e hicieron así posible el triunfo de la izquierda.<sup>6</sup>

No es el propósito de este trabajo realizar una crítica puntual del argumento teórico y la evidencia empírica aportada por estos autores. Antes bien, nos interesa discutir globalmente esta interpretación de la coyuntura política chilena, cuyo mérito principal reside en el hecho que, en sus términos más generales, coincide con los análisis teóricos y las posturas políticas que en la práctica concreta asumieron muchos intelectuales y fracciones políticas de la izquierda chilena. Por otra parte, el trágico final del

<sup>4</sup> *Ibid.*, p. 118. (Subrayado nuestro.)

<sup>5</sup> Wolpin, "La izquierda chilena", *op. cit.*, p. 68.

<sup>6</sup> Wolpin, "La influencia internacional", *op. cit.*, pp. 494-495. (Subrayado nuestro.)

gobierno de la Unidad Popular y la instauración de una brutal y sangrienta dictadura militar han contribuido, aparentemente, a dotar a la tesis que estamos criticando con un halo de exactitud que en realidad no tiene. Lo cierto es que se trata de una tesis errónea. Huelga anotar, sin embargo, que nuestro desacuerdo con las interpretaciones "accidentalistas" del triunfo electoral y de la propia experiencia del gobierno popular no significa que postulemos que tales acontecimientos constituían una "necesidad histórica" inexorable. Digamos más bien que, sin poseer ese raro don de la inevitabilidad, ellos se hallaban dentro de la estrecha franja de alternativas históricas que se abrían en la encrucijada a que había llegado Chile a fines de la década del sesenta. No hay lugar, entonces, para sorpresas o "accidentes históricos" sino que se trata de comprender y explicar lo ocurrido teniendo en cuenta los muchos determinantes que, en tan particular coyuntura, influyeron para que ése y no otro hubiera sido el resultado.

Ciertos rumbos históricos habían sido claramente sobrepasados por el continuo avance en la movilización política de las clases populares y por el desenvolvimiento de una economía que había exasperado las contradicciones existentes entre las propias clases dominantes. Una experiencia populista era impensable frente a la madurez alcanzada por el proletariado; el reformismo burgués acababa de fracasar en el sexenio freístas; la fórmula liberal de viejo cuño había sido declarada obsoleta y ruinosas hasta por la misma burguesía; la "vía armada" era una ilusión voluntarista de algunos espíritus románticos, una extrapolación mecanicista y abstracta —y por lo tanto no marxista— de experiencias históricas realizadas en otros países en condiciones muy distintas a las imperantes en el Chile de 1970. Por lo tanto, para ensayar la variante populista o la reformista o la liberal era necesario desandar un camino, retrotraer la historia chilena a un pasado que las clases populares con su creciente movilización se habían encargado de liquidar. Eran falsas opciones que requerían elementos muy diferentes a aquellos con los cuales se estaba tejiendo la historia contemporánea; eran anacrónicas en el más puro sentido de la palabra. Por esto es que, sin hablar de "inevitabilidad histórica" o de la presencia en el destino chileno de un determinismo inexorable que conducía irresistiblemente hacia el socialismo, es preciso reconocer que hay pocos elementos para justificar teóricamente la estupefacción y perplejidad de muchos observadores ante la elección de Salvador Allende como presidente y los decididos pasos en dirección al socialismo que se dieron en su breve y turbulenta gestión de gobierno.

Ahora bien, en este trabajo se pretende llamar la atención acerca de lo que consideramos un serio equívoco latente en las distintas versiones de la tesis que subraya el carácter accidental o fortuito del periodo histórico inau-

gurado el 4 de diciembre de 1970 y violentamente interrumpido por el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973: la negación —o la subestimación, en el mejor de los casos— de las raíces históricas y estructurales sobre las cuales se afirma la reciente movilización política de las clases populares, esas “condiciones de fondo” que tan correctamente señalara Allende a Debray. La equivocada apreciación de la importancia de estas determinaciones obliga a los muchos sostenedores de aquella tesis a acudir a expedientes metafísicos —del tipo de las “sorpresas históricas”, “los lujos costosos de las clases dominantes” o los “factores fortuitos”— a fin de explicar lo que le resulta inexplicable. Pero el hecho que una teoría se revele incapaz de dar cuenta satisfactoriamente de cierta práctica social no debería causar demasiada extrañeza. Lo curioso y paradójico, sin embargo, es encontrar tales afirmaciones en autores que emplean un vocabulario y una fraseología extraída de algunos textos clásicos del marxismo. La razón por la que se produce este fracaso teórico es clara: el análisis se realiza como si la coyuntura de 1970 se constituyera de manera autónoma en relación a la totalidad del proceso histórico y a las múltiples contradicciones resumidas en ese momento de su desarrollo. En otras palabras, a pesar de la retórica no hay análisis marxista. Marginada de la totalidad histórico-estructural, la coyuntura se independiza de sus condicionamientos y sus determinaciones se diluyen haciéndose necesario entonces recurrir a los eventos circunstanciales que la caracterizaron a fin de poder explicar su existencia misma. Además está decir que esto no implica negar la distinción analítica que debe establecerse entre las condiciones histórico-estructurales de largo plazo y los factores inmediatos que obran como precipitantes del proceso histórico. Al contrario, tal distinción es necesaria: lo que se debe evitar es que a partir de la misma se pierda de vista la interrelación dialéctica existente entre ambos órdenes de factores.<sup>7</sup> Es cierto que la división de las clases do-

<sup>7</sup> Véase el lúcido análisis de A. Gramsci relativo al nexo dialéctico existente entre lo que él llama “movimientos y hechos orgánicos” y “movimientos y hechos coyunturales”. Aun a riesgo de extender demasiado estos comentarios, creemos que vale la pena reproducir sus palabras: “El error en que a menudo se cae en los análisis histórico-políticos consiste en no saber hallar una relación justa entre lo que es orgánico y lo que es ocasional: se llega así a exponer como inmediatamente operantes causas que lo son, en cambio, mediatamente, o a afirmar que las causas inmediatas son las únicas causas eficientes; en el primer caso se tiene el exceso de ‘economismo’ o de doctrinarismo pedante; en el otro, el exceso de ‘ideologismo’; en un caso se sobrestiman las causas mecánicas, en el otro se exalta el elemento voluntarista e individual.” Antonio Gramsci, *Note Sul Machiavelli, sulla Politica e sullo Stato Moderno*. Einaudi, Turín. Sexta edición, 1966, pp. 42-43. La necesidad de distinguir entre condiciones “de larga duración” y los precipitantes del proceso histórico ha sido objeto de preocupación por parte de diversos autores en fecha relativamente reciente. Ver entre otros

minantes hizo posible, junto con otras causas, naturalmente, el triunfo electoral de Salvador Allende pero el problema no radica ahí sino en explicar por qué las diferentes fracciones de la burguesía y la oligarquía terrateniente fueron incapaces de transar sus diferencias y reconstituir su unidad política e ideológica en vísperas de una decisiva batalla electoral. Es decir, una vez identificado uno de los elementos particulares que conforman la coyuntura crítica de 1970 se hace imprescindible explorar los lazos que lo ligan a la totalidad histórica en la cual se constituye. En el caso que estamos examinando parece claro que las clases dominantes no pudieron aglutinarse en una única fuerza política porque fueron incapaces de hallar una fórmula aceptable para conciliar dos proyectos antagónicos de dominación burguesa. Como es de imaginarse, la existencia de estos proyectos no emanaba de la personalidad de los candidatos ni de las tácticas electorales de los partidos sino que era el resultado de la evolución económica que había tenido lugar en el país en los últimos años y que produjo, por un lado, una exacerbación de los antagonismos existentes entre distintas fracciones de la burguesía y los grandes intereses agrarios y, por el otro, la ruptura de la precaria alianza de clases que —forjada aceleradamente ante las perspectivas inmediatas de un triunfo popular en 1964— había volcado todo el peso de su poder e influencia en favor de la candidatura de Frei.

Lo propuesto en estas páginas se puede plantear entonces en los siguientes términos: el examen de la coyuntura política de 1970 debe realizarse a partir de la evaluación de tres órdenes de factores condicionantes: *a)* las contradicciones y conflictos generados por la industrialización desde los años treinta y, muy particularmente, por su carácter dependiente y monopólico tan agudizado en la década del sesenta. *b)* Los cambios producidos en la estructura de clases: constitución de un proletariado industrial; diferenciación de distintas fracciones de la burguesía; expansión de las capas medias; aparición de “masas populares urbanas”; decadencia del inquilinaje y surgimiento de un proletariado rural; además, las transformaciones sufridas por el conjunto de la sociedad tales como los cambios demográficos y la urbanización, por ejemplo, también deben ser integradas en el marco teórico del análisis. *c)* El proceso de ampliación de las bases sociales del Estado, con sus consecuencias para las diversas alianzas de clase constituidas en su seno; las ideologías legitimadoras de su dominación y el carácter de la movilización política de las clases populares. La coyuntura de 1970 resume así, en un punto crítico, las contradicciones generadas a lo largo de

a Lawrence Stone, “Theories of revolution”, *World Politics*, 18, Nº 2, enero de 1966, p. 164. Ver también Robert Forster y Jack P. Greene, *Preconditions of Revolution in Early Modern Europe*, Baltimore y Londres, 1970.

varias décadas de desarrollo económico, cambios sociales y transformaciones políticas. Por ello es que se torna necesario integrar estas determinaciones histórico-estructurales en la explicación del “momento actual” del conflicto de clases, tal como éste se había constituido en Chile al finalizar los años sesenta. Si aquellos determinantes no se integran en la base misma del análisis, las explicaciones que resulten tenderán casi fatalmente a exaltar el papel del azar o de las grandes personalidades en el proceso histórico y el Estado se transforma en un etéreo y remoto escenario sobre el cual los conflictos políticos se suceden en caprichosa indeterminación.

Los antecedentes económicos en vísperas del triunfo de la Unidad Popular han sido repetidamente señalados por diversos estudiosos que, de una manera y otra, han subrayado la magnitud y naturaleza de los cambios que tuvieron lugar durante el transcurso de la industrialización: lentitud en el proceso de crecimiento, persistente retraso de la agricultura, incapacidad para generar empleos en la medida requerida por el aumento demográfico, tendencias regresivas en la distribución del ingreso, constitución de un sector industrial monopólico y dependiente y, finalmente, necesidad de ampliar continuamente la intervención del Estado en la economía a fin de imprimir un cierto dinamismo al conjunto.<sup>8</sup> Tales transformaciones —y sus implicaciones sociales— modificaron de manera decisiva la correlación de fuerzas existente en el interior del Estado: progresivo deterioro de la capacidad de dominio de los intereses terratenientes tradicionales; ascenso de una burguesía industrial estrechamente vinculada al capital extranjero; expansión de las capas medias y diferenciación de sus órganos de representación política en relación con los de las clases dominantes; consolidación del movimiento obrero y los partidos proletarios e irrupción de las masas populares urbanas y el campesinado en la arena política. No abundaremos en estos aspectos por cuanto ellos han sido examinados prolijamente, entre otros, por Aníbal Pinto, Enzo Faletto, Joan Garcés, Sergio Aranda, Alberto Martínez y Eduardo Ruiz.<sup>9</sup> Antes bien, lo que nos interesa aquí es proporcionar algu-

<sup>8</sup> Ver Sergio Aranda y Alberto Martínez, “Estructura económica: algunas características fundamentales” en Aníbal Pinto y otros, *Chile hoy*, México, 1970, pp. 55-172.

<sup>9</sup> Aníbal Pinto, “Desarrollo económico y relaciones sociales” en A. Pinto y otros, *Chile hoy*, México, 1970. Aníbal Pinto, “Estructura social e implicaciones políticas” en *Revista Latinoamericana de Ciencia Política*, I, N° 2, 1970, pp. 333-351. Sergio Aranda y Alberto Martínez, *op. cit.* Joan Garcés, 1970. *La pugna política por la presidencia en Chile*. Santiago, 1971. Enzo Faletto y Eduardo Ruiz, “Conflicto político y estructura social” en A. Pinto y otros, *op. cit.*, pp. 213-254. Enzo Faletto, Eduardo Ruiz y Hugo Zemelman, *Génesis histórica del proceso político chileno*, Santiago, 1971.

na evidencia relativa a las tendencias a largo plazo en la movilización política de las clases populares, especialmente en lo que respecta al fortalecimiento de sus organizaciones, su capacidad de lucha contra las clases dominantes y su creciente radicalización. Desafortunadamente estos tópicos no han sido suficientemente explorados, aun por aquellos que adoptan una perspectiva teórica que privilegia el papel de las determinaciones histórico-estructurales. Así, al estudiarse el significado político del movimiento popular, mucho tiempo y esfuerzo ha sido dedicado al examen de los resultados electorales más recientes, descuidándose otros aspectos tal vez menos llamativos pero no por ello de inferior relevancia. En las páginas que siguen se tratará de aportar algunas reflexiones sobre los mismos y sobre el contexto histórico en donde se originan los elementos políticos que se conjugaron en la coyuntura crítica de 1970. Esperamos así contribuir a enriquecer las explicaciones relativas al ascenso de la Unidad Popular y llamar la atención hacia la lenta constitución de las condiciones socio-económicas y políticas que hicieron posible ese fenómeno.<sup>10</sup>

## II. MOVILIZACIÓN POLÍTICA: CLASE, PARTIDO Y CRISIS HEGEMÓNICA

Antes de proseguir con el tratamiento de nuestro tema se torna imprescindible hacer un breve paréntesis a fin de plantear de modo inequívoco el significado que reviste para nosotros el concepto de movilización política. A pesar de su importancia teórica y de su cada vez más frecuente utilización en la literatura académica y política contemporánea, dicho término está lejos de haber sido bien definido y, mucho menos, adecuadamente integrado en un discurso teórico más amplio. Sin pretender desviar la atención hacia una revisión crítica de las conceptualizaciones y teorizaciones existentes —tarea que reservamos para otra ocasión— creemos que es necesario por lo menos explicitar el concepto de movilización política que vamos a utilizar. Éste se inserta y adquiere significado en el interior de la teoría marxista del Estado, especialmente tal como fue desarrollada en las obras de Antonio Gramsci. En esencia, aquel concepto representa la aparición de un nuevo sujeto histórico que irrumpe en la escena política y produce una ruptura crítica en la capacidad hegemónica de la clase dirigente. Se trata por lo tanto de una irrupción de las masas en el Estado burgués, de una insurgencia reveladora de una insostenible “presión desde abajo” que ya no

<sup>10</sup> Esta pérdida de perspectiva histórica se torna más comprensible al constatar el reducidísimo número de estudios existentes sobre la evolución del movimiento obrero y los partidos de izquierda en el siglo xx.

se puede desbaratar con los métodos tradicionales de control político: "dirección intelectual y moral", cooptación, exclusión o represión. El propio Gramsci, al examinar la constitución de las situaciones de crisis orgánica, afirmaba que ellas sobrevenían "ya sea porque la clase dirigente ha fracasado en alguna de sus grandes empresas políticas para la cual había demandado o impuesto por la fuerza el consenso de las masas (como en la guerra) o bien porque grandes masas (especialmente de campesinos y pequeños burgueses intelectuales) han pasado bruscamente de la pasividad política a una cierta actividad y plantean reivindicaciones que en su conjunto inorgánico constituyen una revolución. Se habla de crisis de autoridad y es ésta precisamente la crisis de hegemonía, o crisis del Estado en su conjunto".<sup>11</sup>

Alessandro Pizzorno ha hecho valiosos comentarios sobre los textos gramscianos, en los cuales llega inclusive a establecer ciertas equivalencias a nivel conceptual entre las teorizaciones actuales de la movilización social —tal como se las encuentra hoy día en las ciencias sociales— y las elaboraciones de Gramsci. Por su parte, Gino Germani también ha insistido en las semejanzas que existen entre su propia teoría de la movilización y la noción de "crisis orgánica" que ocupa un papel tan central en el pensamiento gramsciano.<sup>12</sup> En todo caso, y sin entrar en este momento a efectuar un análisis de las correspondencias teóricas que existirían entre las elaboraciones de Gramsci y las formulaciones más recientes, vale la pena subrayar aquí dos elementos cuya importancia ha sido particularmente señalada por aquél.

En primer lugar, Gramsci habla de una irrupción de las masas que se produce en el interior de un Estado caracterizado por una correlación de fuerzas sociales que refleja una fase específica de su desarrollo. Esta "relación de fuerzas" es inmediatamente alterada por el surgimiento de un nuevo sujeto histórico (o más de uno, en el caso de una movilización simultánea del proletariado industrial y el campesinado, por ejemplo). La integración de esta nueva clase al Estado, no ya a través de su pasiva sumisión al dominio de las clases dirigentes sino como protagonista activo que lucha por sus intereses, origina una redefinición del carácter de clase del Estado, deteriora el sistema de alianzas y coaliciones preexistentes y, por último, precipita una crisis hegemónica. Por lo tanto, la concepción gramsciana de

<sup>11</sup> A. Gramsci, *op. cit.*, p. 50.

<sup>12</sup> Alessandro Pizzorno, "Sobre el método de Gramsci (de la historiografía a la ciencia política)", en A. Pizzorno y otros, *Gramsci y las ciencias sociales*. Córdoba, Cuadernos de Pasado y Presente, 19, 1970, pp. 41-64. Gino Germani, "El surgimiento del peronismo: el rol de los obreros y de los migrantes internos" en *Desarrollo Económico*, N° 51, octubre-diciembre 1973, p. 487.

la movilización política no se agota en la sola comprobación de que hay más gente expuesta a la modernidad o que hay más individuos que concurren a votar el día de las elecciones; lo que se pregunta Gramsci es si las clases subalternas cuestionan o no la legitimidad del Estado y si ese cuestionamiento se traduce en una lucha política encaminada hacia la conquista del poder estatal. No se trata entonces de un problema relativo a la mayor o menor participación política de los individuos sino que lo que está en discusión es el surgimiento de una clase como sujeto histórico: las "unidades de análisis" son clases sociales (o fracciones de clase) y no individuos aislados. La proporción de adultos que participan en el proceso político (en sus distintas fases y niveles) puede aumentar o disminuir, pero el significado de tales variaciones sólo se descifra luego de establecer su relación con los cambios habidos en el modo de inserción de las diferentes clases en el Estado. Es por ello que en el pensamiento gramsciano se detecta una ruptura allí donde las ciencias sociales modernas postulan una continuidad: su idea de la movilización implica un cambio cualitativo, y que además ocurre bruscamente, en el modo de integración de las clases populares al Estado. Por esto la movilización política es el preludio de la crisis hegemónica. La propia noción de ruptura o discontinuidad, esencial en el discurso teórico gramsciano, se halla ausente en la gran mayoría de las formulaciones relativas al tema de la movilización: ésta aparece como una sucesión incremental de cambios merced a los cuales segmentos crecientes de la población van siendo asimilados y asemejándose cada vez más a los grupos sociales que ya están "integrados" dentro del sistema. En otras palabras, es un proceso mediante el cual se homogeniza una población, limándose las diferencias que separaban a la periferia marginada del centro integrado, llegándose así a un "hombre moderno" poseedor de una serie de rasgos comunes independientemente de su lugar de residencia, ocupación, educación o clase social. Por ello es que se postula el carácter continuo de la movilización y sus consecuencias uniformadoras e integradoras ejercidas sobre las distintas clases y estratos de la sociedad.<sup>13</sup> En Gramsci, en cambio, hay una ruptura, y el resultado, lejos de producir la asimilación de los grupos recientemente movilizados, produce exactamente lo opuesto: su diferenciación. A través de la movilización las clases populares adquieren conciencia de sí mismas, descubren su inserción en lo que aquél llamaba la "compleja grandiosidad del Estado" y se aprestan a luchar para poner

<sup>13</sup> La elaboración más completa desde esta perspectiva se encuentra en Reinhard Bendix, *Nation-building and Citizenship*, Nueva York, 1964, pp. 1-104 y en el ensayo de T. H. Marshall "Citizenship and Social Class" reproducido en su obra *Class, citizenship and Social development*, Nueva York, 1964.

fin a una explotación secular. Gramsci sostenía que en Italia, por ejemplo, el campesinado meridional sólo después de su movilización alcanzó a diferenciarse de los señores de la tierra y de la pequeña burguesía intelectual de la aldea. Antes se hallaba prisionero en la maraña ideológica con la cual las clases dominantes habían legitimado su dominio y era incapaz de cobrar plena conciencia de su identidad como clase. En otras palabras, la movilización política implica entonces una capacidad para negar y contestar la dirección intelectual y moral que el Estado ejerce sobre las clases subordinadas. Es precisamente por esta desintegración de la unidad político-ideológica de la sociedad burguesa que se puede hablar de la formación de un nuevo sujeto histórico y de crisis hegemónica.<sup>14</sup>

En segundo lugar, para Gramsci el fenómeno de la movilización se halla íntimamente ligado a la emergencia de un partido revolucionario y el desarrollo de las organizaciones de clase. Esto implica entonces que no sólo se produce la “irrupción de las masas” sino que, además, esa súbita entrada de las clases subalternas va acompañada por la aparición o fortalecimiento de diversas organizaciones representativas de sus intereses. Claro está que el surgimiento de estas organizaciones va a estar profundamente influido por la naturaleza misma del proceso de movilización; por las contradicciones específicas que definen la coyuntura política en el momento en que se produce la movilización por la estructura del Estado y por las características de las distintas alianzas y bloques que se acomodan en su interior. No hay una secuencia única ni estadios uniformes en la constitución de los organismos de representación de las clases subalternas: las características que asumirá en cada país estarán condicionadas por el contexto socioeconómico y por las tradiciones políticas y organizativas dentro de las cuales

<sup>14</sup> Vale la pena destacar aquí que la teoría de la movilización elaborada por Gino Germani —referida claro está a un campo de fenómenos más amplio que el que aquí nos ocupa— contiene ciertos elementos que retienen el carácter traumático de muchos procesos de movilización social. Se trataría de ver, entonces, hasta qué punto una *teoría general del cambio social y de la movilización* puede iluminar ciertos aspectos que no entran dentro del campo teórico del análisis gramsciano del *Estado capitalista*. Véase, por ejemplo, una aplicación al caso del peronismo en G. Germani, *op. cit.* También del mismo autor, “Fascism and Class” en S. J. Woolf, *The Nature of fascism*, Nueva York, 1968, pp. 65-96. La versión más general de la teoría se encuentra en “Los procesos de movilización e integración y el cambio social” en *Desarrollo Económico*, vol. 3, N° 3, octubre-diciembre 1963, pp. 403-421. Una teorización alternativa sobre el problema de la movilización social se encuentra en Karl W. Deutsch, “Social mobilization and political development”, *American Political Science Review* (3), 1961, pp. 493-514. Sobre la teoría marxista del Estado, ver Nicos Poulantzas, *Clases sociales y poder político en el Estado capitalista*, México, 1969 y Ralph Miliband, *El Estado en la sociedad capitalista*, México, 1970.

se originan el partido y los demás órganos de representación popular. Pero, cualesquiera que sean las circunstancias particulares bajo las cuales ellos se desarrollen, sin su existencia la pura irrupción de las masas no llegará a trascender los marcos de la protesta desarticulada y carente de valores históricos de reemplazo. Sólo el partido, como aparato organizativo y como "intelectual colectivo", puede plasmar en un actor histórico la insurgencia del proletariado.<sup>15</sup>

A partir de estos criterios teóricos sugeridos por la lectura de Gramsci es posible identificar tres elementos definitorios de un proceso de movilización política: *a*) la irrupción de las masas; *b*) el desarrollo de las organizaciones de clase (partidos y sindicatos) y *c*) crisis de hegemonía de las clases dominantes. Es de suma importancia insistir en la necesidad de que se conjuguen estos tres elementos al hablar de un proceso histórico de movilización política. No basta la sola entrada de las clases populares a la arena política para concluir que se ha desencadenado un proceso de movilización. La "rebelión de las masas" —tal como desde una perspectiva elitista fue atestiguada con mucha alarma por Ortega y Gasset— es uno de los requisitos, pero está muy lejos de satisfacer *per sé* a los demás. En otras palabras, la insurgencia de las clases populares es una condición necesaria pero no suficiente de la movilización política. Para que ésta exista se requiere que las otras condiciones también se cumplan, es decir, que se desarrollen las organizaciones de clase —especialmente el partido del proletariado, al cual no por azar Gramsci le adjudicó el papel del "príncipe moderno"— y que, por otra parte, todo este proceso adquiera un significado político tal que las clases dirigentes resulten impotentes para mantener su hegemonía sobre el proletariado.<sup>16</sup>

El descuido en la consideración unitaria de estos tres elementos componentes de la movilización política es responsable de no pocas confusiones en las ciencias sociales modernas: al reducir el fenómeno complejo de la movilización a uno de sus elementos, la entrada de las masas en la arena política, procesos distintos aunque aparentemente semejantes han pasado a ser considerados como idénticos. Un caso típico es el frecuente tratamiento de la extensión del sufragio como sinónimo de la movilización política, a

<sup>15</sup> A. Gramsci, "Note sul Machiavelli", *op. cit.*, p. 5. Sobre la concepción del partido en Gramsci ver: Giorgio Bonomi, *Partito e Rivoluzione in Gramsci*, Milán, Feltrinelli, 1973. María Antonietta Macciocchi, *Per Gramsci*, Bolonia, Il Mulino, 1974, pp. 82-88, 276-283.

<sup>16</sup> Es claro que estos tres elementos: irrupción de las masas, formación del partido y crisis hegemónica no se originan simultáneamente. Su maduración es distinta y su génesis histórica también. La simultaneidad se refiere a la coyuntura concreta en que se produce la movilización política.

pesar de las claras diferencias que median entre ambos. La extensión del sufragio, concebida como la concesión de derechos políticos a clases y estratos de la población que carecían de los mismos, y el ejercicio concreto de esos derechos expresados a través de la movilización electoral no necesariamente son indicios de un proceso subyacente de movilización política. La extensión del sufragio —concesión del *estatus* de ciudadano a nuevos sectores de la población— y la movilización electoral —práctica de los derechos de la ciudadanía que eventualmente podría resultar de la primera— revelan que hay una ampliación de las bases sociales del Estado pero nada nos dicen acerca de la naturaleza misma de esa incorporación. Puede ser tanto el resultado de la movilización política del proletariado como el corolario de una decisión de las clases dominantes orientada a producir su asimilación preventiva al *statu quo*. En un caso el crecimiento en el número de individuos habilitados para ejercer los derechos políticos y los sucesivos aumentos en el tamaño del electorado es la consecuencia de la movilización popular; en otros casos puede ser la realización de una estrategia de las clases dominantes dirigida a impedir la movilización popular y, a través de ciertas concesiones oportunas y marginales en términos de su costo, consolidar el régimen político existente. ¿Cómo se sabe cuál es el significado de la extensión del sufragio y la movilización electoral en un cierto país y en un momento dado? ¿Cómo decidir si se trata de una manifestación de la movilización popular o de una estrategia de cooptación de las clases dominantes? Resolver esta contradicción sólo es posible si se toma en cuenta la totalidad del momento histórico en el cual se produce. Si tiene lugar en un contexto signado por la intensificación de la lucha de clases, en donde vastos sectores populares han comenzado a plantear demandas que el sistema no está en condiciones de absorber sin efectuar concesiones de importancia y que comprometan su supervivencia y si, al mismo tiempo, tales exigencias son articuladas a través de un partido proletario y de organizaciones populares que encuadran tales reivindicaciones dentro de una ideología revolucionaria, pocas dudas caben que nos hallamos ante una situación de crisis hegemónica en donde la movilización electoral es sólo uno de sus aspectos más visibles. Sin embargo, si la ampliación de la base electoral tiene lugar en un contexto caracterizado por el dominio sin contrapeso de las clases propietarias, en donde los instrumentos de dirección ideológica son suficientes para regular las escasas y aisladas demandas populares, y si, además, no hay partidos u organizaciones populares o éstos carecen de los recursos necesarios para cuestionar y enfrentar a las clases dominantes, en tal caso la movilización electoral, por drástica y acelerada que parezca, no es sino un intento de asimilación “desde arriba” de las clases populares desti-

nado precisamente a frustrar su movilización. Que dicho intento tenga éxito o fracase ya es otro punto; si ocurre lo primero el sistema se consolida y las perspectivas de una transformación radical se postergan por mucho tiempo. Se perpetúa la exclusión de algunas clases (el campesinado, por ejemplo), se practica cierta demagogia con las masas populares urbanas (políticas paternalistas en relación a los "marginales") y se efectúan algunas concesiones a los sectores obreros organizados, especialmente con aquellos cuya inserción en la economía nacional los hace potencialmente peligrosos en caso de conflicto. En resumen, se excluye a unos, se manipula a otros y se coopta a la "aristocracia obrera" al paso que se impide la constitución de organizaciones autónomas y unitarias del proletariado. Sin embargo, si esta estrategia no tiene éxito es probable que la apertura formal y "desde arriba" del juego político produzca un efecto exactamente opuesto a lo esperado y la asimilación preventiva se transforme en un proceso incontrolable para las propias clases dirigentes, desencadenando la movilización política de las masas.

### III. CHILE: LA MOVILIZACIÓN POLÍTICA DE LAS CLASES POPULARES

Así planteada, en sus rasgos más generales, la noción de movilización política utilizada en este trabajo, pasemos ahora a examinar algunos materiales referidos a la experiencia chilena. En primer lugar estudiaremos los cambios habidos en la participación electoral y su significado dentro del contexto de una teoría de la movilización política. Luego nos concentraremos en la evolución del movimiento obrero y las tendencias observadas en las huelgas y los conflictos económicos.

#### a) *Extensión del sufragio y participación electoral*

Durante los años de gobierno del Frente Popular se percibió un notorio fortalecimiento de los partidos de izquierda. Su creciente poderío se reflejaba fácilmente en la aritmética electoral tanto por el aumento de votantes que año tras año engrosaban el electorado socialista y comunista como por el creciente número de bancas parlamentarias que eran conquistadas por los candidatos de estos partidos. Además, el afianzamiento de la izquierda se producía también en otros niveles que contribuían a dotar de una cierta estabilidad y persistencia al apoyo recibido en cada elección: nos referimos aquí al desarrollo de un aparato organizacional firmemente asentado en ciertos núcleos obreros, diseminados en distintas regiones del país, y en una

intelectualidad pequeño burguesa desarrollada en el ámbito universitario.<sup>17</sup> Sin embargo, la experiencia del Frente Popular finalizó con una verdadera catástrofe para la izquierda y las clases populares. En 1947 el presidente González Videla inició una violenta campaña cuyo objetivo era dismantelar las organizaciones del proletariado. Al año siguiente el gobierno propuso y obtuvo del Congreso la sanción de la ley de Defensa Permanente de la Democracia bajo cuyos enunciados todos los individuos sobre los cuales recaía la sospecha de ser militantes o simplemente simpatizantes del Partido Comunista fueron eliminados de los registros electorales. Por este expediente, cerca de 26 000 personas fueron privadas de sus derechos políticos e incapacitadas para asociarse a los sindicatos. Más aún, no pocos líderes y activistas del Partido Comunista fueron confinados a regiones remotas del país. Otros fueron desterrados. Las organizaciones de la clase obrera destruidas y todo grupo que pudiera representar una amenaza potencial contra las clases dirigentes podían ser juzgados como “comunistas” —según la amplia y elástica definición legal de dicho término— y en consecuencia susceptibles de recibir las sanciones contempladas por la ley.<sup>18</sup> En una palabra, la política seguida por González Videla produjo un severo retroceso en el movimiento popular y desmovilizó temporalmente aquellos sectores de la clase obrera que habían logrado darse una organización. Al mismo tiempo, esta ofensiva antiobrera marcó el fin de una década de coaliciones —inestables y efímeras, pero recurrentes— entre los partidos de base obrera y los representativos de las capas medias y ciertas fracciones emergentes de la burguesía. El colapso y la violenta ruptura de esta coalición —inaugurada en 1938— fueron acelerados por una variedad de factores. Algunos domésticos: la atenuación del ritmo de la industrialización; la consolidación de los sectores medios y la adopción de una serie de decisiones de corte conservador y tendientes a restablecer un compromiso con las clases dominantes. Algunos otros de carácter internacional, tales como las presiones norteamericanas generadas por la necesidad de contar con “gobiernos amigos” en una época de guerra fría.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Ver Robert J. Alexander, *Communism in Latin America*. New Brunswick, Rutgers University Press, 1957, pp. 177-210. Frederick Pike, *Chile and the United States, 1880-1962*, Notre Dame, U. of Notre Dame Press, 1963, pp. 257-305.

<sup>18</sup> Ver J. Petras, *Politics and social forces in Chilean development*, Berkeley and Los Angeles, 1969, pp. 128-132; Federico Gil, *El sistema político de Chile*, Santiago, 1969, p. 90; J. Barría, *El movimiento obrero en Chile*, Santiago, 1971, pp. 101-103; H. Ramírez Necochea, *Historia del imperialismo en Chile*, Santiago, 1970, pp. 281-82. Robert J. Alexander, *op. cit.*, pp. 199-205. Merece ser destacado que el Partido Comunista había obtenido 16.5% de los votos en las elecciones municipales de 1947.

<sup>19</sup> Ver, por ejemplo, la declaración del Presidente González Videla del 23 de octubre de 1947 y reproducida en Alexander, *op. cit.*, pp. 203-204.

La represión de esos años perjudicó seriamente las actividades del partido comunista y de la izquierda en general. Una profunda desorganización se produjo en las filas del socialismo a consecuencia de lo cual se multiplicaron las divisiones en fracciones y microfracciones cuyas rivalidades impedían coordinar los más elementales esfuerzos para la defensa de las clases subalternas. La caída del movimiento popular alcanzó su foso más profundo en las postrimerías de la década del cuarenta y los primeros años de la siguiente. El triunfo del ex dictador Carlos Ibáñez del Campo, a la cabeza de una vasta y amorfa coalición de fuerzas políticas que contó con el respaldo entusiasta de las masas populares desorientadas y sin vanguardia, es una buena indicación de la decadencia a que habían llegado las organizaciones políticas y sindicales del proletariado. Pero el fracaso del experimento populista iniciado por Ibáñez y el abandono de una política represiva contra la izquierda (aun cuando el Partido Comunista siguió siendo considerado ilegal hasta 1958) hicieron posible la recuperación y reorganización del movimiento popular. Esto culminó el 10. de marzo de 1956 con la creación del Frente de Acción Popular (FRAP), constituido como una coalición de varios partidos políticos de orientación izquierdista. Cada uno de ellos mantenía sus propias organizaciones, dirigentes, afiliados y órganos de financiamiento y difusión pero actuaban como bloque en el Congreso, presentaban una lista común de candidatos en las elecciones nacionales y desarrollaban sus campañas electorales de manera concertada.<sup>20</sup> Demás está decir que la columna vertebral del FRAP eran los partidos Comunista y Socialista, el último de los cuales había surgido en julio de 1957 a raíz de la reunificación del Partido Socialista de Chile y el Partido Socialista Popular, fusión que, valga notar, fue precipitada por la formación del FRAP. En lo que respecta al movimiento obrero, el relajamiento producido por el ascenso del ibañismo facilitó la labor de distintos grupos de sindicalistas y militantes que pugnaban por recomponer sus cuadros luego de la ofensiva reaccionaria lanzada por González Videla y para dotarlos de la unidad y coherencia que tanta falta les hacía. Tales esfuerzos, indisolublemente unidos al nombre de Clotario Blest, prosperaron rápidamente al punto que el 12 de febrero de 1953 quedó formalmente constituida la Central Única de Trabajadores de Chile (CUT). La creación de la CUT, a pesar de que no produjo resultados espectaculares desde el punto de vista de la expansión cuantitativa del movimiento obrero, significó un gran paso hacia adelante dado por el proletariado. Se mejoró su capacidad de negociación y se efectuaron notables progresos en la coordinación y efectividad de las luchas

<sup>20</sup> Petras, *op. cit.*, pp. 174-178. Alejandro Chelén Rojas, *Trayectoria del Socialismo*, Buenos Aires, Austral, s/f, pp. 141-174.

reivindicativas de los distintos sindicatos y federaciones, tal como queda evidenciado por el éxito de las huelgas generales de 1954 y 1955. Además, la creación de la CUT y el papel preponderante que les cupo a los partidos marxistas contribuyó a reforzar en el movimiento obrero una ideología socialista que gradualmente pasó a ser adoptada por segmentos cada vez más numerosos de las clases populares.<sup>21</sup>

El resurgimiento de los partidos de izquierda y la consolidación de un movimiento obrero unitario orientado por la ideología marxista revelaban que las clases subalternas eran capaces de resistir los duros ataques de que habían sido objeto durante el último lustro y que la política “desmovilizadora”, aplicada por González Videla y la coalición reaccionaria de gobierno, no había rendido los frutos que las clases dominantes esperaban con tantas ilusiones. De hecho, la fase represiva sufrida por el movimiento popular chileno le otorgó una madurez y una conciencia que antes no tenía y lo templó para su definitiva aparición sobre la escena política en un papel protagónico y no ya como la masa electoral de las aventuras políticas de la pequeña burguesía. En este sentido, luego de muchos años, la movilización política de las clases populares comenzaba a llegar a un punto de no retorno a partir del cual ya sería imposible gobernar en Chile sin introducir cambios de importancia en las condiciones socioeconómicas y políticas bajo las cuales había funcionado el sistema en su conjunto. Con el correr de los años el fenómeno que con mucha intuición observó Alberto Edwards Vives alrededor de 1920 y que culminó con la crisis de la dominación oligárquica se había generalizado y en su expansión afectó a distintos segmentos del proletariado que tradicionalmente permanecían ajenos a los intentos de organización promovidos por la izquierda. Lo que Edwards Vives señalaba era que “La crisis de 1920 no era un simple problema electoral, como algunos hoy todavía lo imaginan. Algo muy hondo y fundamental había dejado de existir: *la obediencia pasiva de la masa del país ante los antiguos círculos oligárquicos*”.<sup>22</sup> Esta rebeldía de los sectores populares la percibía Edwards entre los trabajadores mineros y algunos núcleos obreros de las grandes ciudades. Un caso paradigmático lo planteaba el departamento de Lautaro, caracterizado por la existencia de un fuerte núcleo proletario ocupado en los yacimientos carboníferos de la zona. Hasta 1915 dicho distrito había

<sup>21</sup> Ver la narración de un protagonista principal de los hechos: Clotario Blest, “La escalada hacia la unidad de la clase trabajadora” en *Punto Final*, Nº 177, 13 de noviembre de 1973. También consúltese a Chelén Rojas, *op. cit.*, p. 132. Jorge Barria, *op. cit.*, pp. 108-9.

<sup>22</sup> Alberto Edwards Vives, *La fronda aristocrática*, Santiago, Del Pacífico, 1966, p. 215. (Subrayado nuestro.)

sido un baluarte del antiguo Partido Nacional y los mineros se limitaban sencillamente a obedecer las órdenes de los grupos dominantes y votaban por los candidatos que se les indicaba. Sin embargo, a partir de 1918, anota Edwards, lo único imposible en Lautaro era la elección de un candidato de la derecha.<sup>23</sup> Ahora bien, tal incapacidad para lograr la obediencia de las clases subalternas —uno de los componentes básicos de la movilización política—, había rebasado los límites estrechos de lo que podría llamarse la “aristocracia obrera” y se estaba manifestando ya desde los fines de la década del cuarenta en segmentos cada vez más amplios del proletariado industrial, las masas populares urbanas y hasta en algunas fracciones del campesinado. Un indicio de meridiana claridad lo dio la pauta de la votación agraria en las elecciones presidenciales de 1952 en donde, por primera vez en la historia chilena, la oligarquía terrateniente fue impotente para controlar el sufragio de sus inquilinos y asalariados quienes brindaron un inesperado apoyo a la candidatura populista de Ibáñez. De esta manera, los grandes terratenientes comprobaron cómo uno de los pilares sobre los cuales reposaba su hegemonía sobre la sociedad agraria —y de la cual dependía su permanencia en el bloque dominante del Estado— había comenzado a derrumbarse. En 1952 los campesinos dijeron ¡no! a sus patronos y votaron por Ibáñez. Pero en 1958 sus preferencias iban a orientarse de modo más definido hacia la izquierda, sustituyendo la pura protesta expresada en el voto populista por una acción afirmativa que se manifestaba en su apoyo a los candidatos socialistas y comunistas. Sin entrar ahora a un análisis detenido sobre la radicalización política del campesino, valga señalar como un indicador de la misma las cifras de las elecciones presidenciales de 1952, 1958 y 1964 en algunas de las comunas más rurales de Chile (con más del 80% de la población activa ocupada en actividades agrícolas): en San Fabián y San Nicolás, por ejemplo, la candidatura de Allende en 1952 no había atraído mucho más del 1% del total de votos válidos masculinos; en 1958, en ambas comunas sobrepasó con holgura el 20% y en 1964 llegó a más del 42%. Esta situación, lejos de ser excepcional fue más bien típica dentro de la evolución de la votación campesina en esa época.<sup>24</sup>

Los años de Ibáñez dieron oportunidad para que la izquierda se reorga-

<sup>23</sup> *Ibid.*, p. 210.

<sup>24</sup> Sobre la votación campesina ver Petras, *op. cit.*, pp. 165-67; Alexander, *op. cit.*, p. 209; Gil, *op. cit.*, p. 95. Hugo Zemelman, “Problemas ideológicos de la izquierda”, *Arauco*, N° 58 (noviembre de 1964), pp. 50-60. Sobre el campesinado como clase consúltese la obra de Almíno Affonso y otros, *Movimiento campesino chileno*, Santiago, 1970. También véase el artículo de Hugo Zemelman, “Factores determinantes en el surgimiento de una clase campesina”, *Cuadernos de la Realidad Nacional*, N° 7, marzo 1971, pp. 84-115.

nizara, reactivara políticamente al proletariado industrial y minero y, además, ampliara considerablemente sus efectivos gracias a la incesante movilización y radicalización de los trabajadores agrícolas. Así, Salvador Allende, como candidato presidencial del FRAP, estuvo a punto de ganar las elecciones presidenciales de 1958, lo que no llegó a ocurrir debido a ciertos confusos episodios nunca del todo aclarados y a la sospechosa maniobra divisionista consumada poco tiempo antes del comicio por un ex sacerdote, popularmente conocido como “el cura de Catapilco”, que le restó a Allende el puñado de votos necesarios para triunfar.<sup>25</sup> En todo caso, el surgimiento del FRAP como una de las más poderosas fuerzas políticas de Chile coincidió con otras manifestaciones de la redoblada presión popular ejercida sobre el Estado con el propósito de democratizar el proceso político. Ya lo había planteado la CUT en su primer congreso en 1953 y ahora, en marzo de 1958, la insatisfacción con los procedimientos electorales y la representatividad de los cargos electivos en las distintas ramas del aparato estatal dieron origen a una coalición parlamentaria denominada Bloque de Saneamiento Democrático. Integraban ese grupo los partidos Socialista, Comunista, Radical, Demócrata Cristiano y otras pequeñas agrupaciones políticas, entre las que debe mencionarse una fracción del oficialista Partido Agrario Laborista. La acción de este bloque contribuyó a sancionar una serie de reformas legislativas que permitiera mejorar drásticamente la honestidad de las elecciones y democratizar el proceso político, obviamente dentro de las limitaciones de la democracia burguesa. Mención especial entre tales reformas merecen la que estableció la “cédula única” y la que derogó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Por la primera se sustituyó la antigua papeleta de votar, emitida por cada partido político, la que permitía la práctica generalizada del cohecho, por una boleta única emitida por el Estado. Por la segunda se legalizaron la existencia y actividades del Partido Comunista y se posibilitó la reinscripción de sus afiliados en los registros electorales. Tales innovaciones, acompañadas por algunas otras de menor cuantía en la legislación y prácticas electorales, fueron sucedidas por otras modificaciones de mayor importancia en el año 1962. Estas últimas instituyeron la inscripción obligatoria en los registros electorales e introdujeron cambios en los procedimientos burocráticos, hasta ese entonces increíblemente complejos y desalentadores, que finalmente hi-

<sup>25</sup> Según Federico Gil, “Si todos los votos de Zamorano hubieran ido a Allende, cosa lógica de esperar, éste se hubiera impuesto a Alessandri por 8 000 votos. Zamorano obtuvo 41 304 votos de agricultores pobres y habitantes de poblaciones marginales, los cuales en 1957 lo habían elegido diputado bajo la bandera del FRAP”. F. Gil, *op. cit.*, pp. 98-99.

cieron posible a las clases populares ejercer los derechos políticos que tenían según las leyes. También en virtud de las reformas de 1962 la inscripción electoral adquirió un carácter permanente, suprimiéndose de esta manera la intencionada necesidad de su periódica renovación. Integradas "formalmente", pero excluidas en la práctica concreta, las clases populares alcanzaron condiciones reales de "participación" y de hacer oír su voz sólo después de removidas esas prácticas burocráticas que no por azar se habían alzado como una barrera formidable a su voluntad política. Por último, la reforma constitucional de 1970 rebajó los límites de edad requeridos para el ejercicio del sufragio de 21 a 18 años y suprimió el requisito de la alfabetización, permitiendo de esta manera que todos los chilenos mayores de 18 pudieran tomar parte en las elecciones que se convocaran con posterioridad a ese año.

De esta manera, las reformas electorales de 1958, 1962 y 1970 contribuyeron efectivamente a la remoción de los innumerables escollos interpuestos para limitar la participación política de las clases populares: sus resultados fueron, en primer lugar, una enorme ampliación del electorado y, en segundo término, un no menos llamativo desplazamiento del centro de gravedad del sistema partidista hacia la izquierda.

Masificación y radicalización del electorado son dos conceptos que resumen muy bien las características de la historia política reciente en Chile: el sentido de los mismos, claro está, fue dado por la aceleración e intensificación de un proceso de movilización política cuya gestación, progresos y retrocesos se habían venido desarrollando por varias décadas y cuyos resultados, al nivel político-electoral, se resumían de esa manera. La crisis del Estado burgués, esa crisis de hegemonía de que hablaba Gramsci, se había finalmente constituido en los últimos años de la década del sesenta, contemporáneamente con el fracaso de las tentativas reformistas ensayadas por la Democracia Cristiana. Es muy importante subrayar aquí que esa crisis no se precipitó debido al resultado de las elecciones presidenciales de 1970, sino que fue precisamente la existencia de la propia crisis en la capacidad hegemónica de las clases dirigentes chilenas la que "explica" el resultado electoral. Éste reflejaba tan sólo la punta del *iceberg* y no la totalidad del mismo. Por ello, *al igual que en 1920, estamos en presencia de una crisis del Estado. Pero antes era a consecuencia de la revuelta de los sectores medios; ahora por la rebelión del proletariado. Crisis de la dominación oligárquica en 1920, crisis de la dominación burguesa en 1970 y entre ambas la movilización política de los diferentes estratos del proletariado.*

Los efectos electorales de dicha movilización política quedan demostrados en el cuadro 1.<sup>26</sup>

Como puede verse hubo un lento crecimiento del cuerpo electoral entre 1952 y 1958, etapa que dio lugar a otra de gran expansión —entre 1958 y 1964— tanto en el número de electores inscritos como en el de los votantes y que se vio decisivamente influida por las reformas electorales ya mencionadas. Luego de 1964 hubo un periodo de disminución en el ritmo de crecimiento hasta que, con posterioridad a 1970, se produjo otra fase de rápida aceleración. En pocas palabras, Chile vivió una rápida transición hacia un electorado de masas en pocos años: una adecuada descripción sobre la magnitud de la irrupción popular se tiene al comprobar que la proporción de inscritos en relación al total de la población adulta pasó del 35.7% al 80.1% entre 1952 y 1970. Creemos que la elocuencia de estas cifras basta y sobra para subrayar el carácter crítico de este fenómeno.

Ahora bien, una de las consecuencias electorales de la movilización política fue la expansión del electorado; otra fue la progresiva radicalización del mismo. No sólo hay más participantes en la arena electoral sino que un número siempre creciente de ellos apoya a los partidos de inspiración marxista. El desplazamiento hacia la izquierda es claro y requiere poco esfuerzo demostrarlo: Allende obtiene el 5.5% de los votos en 1952, sube hasta casi un 29% en 1958 y ahí estuvo a punto de ganar las elecciones. En 1964 vuelve a ser derrotado, pero entonces los contingentes de la izquierda llegaban a casi un millón de chilenos y cerca del 39% del total de votos. En 1970 los partidos populares conservan sus efectivos y Allende obtiene la presidencia, aun cuando con una ligera baja en su participación relativa en el conjunto del electorado. Por último, en las elecciones parlamentarias de 1973, después de dos años y medio de gobierno socialista y en el medio de una campaña sistemática y bien sincronizada de sabotaje y boicot internacional y nacional, la Unidad Popular aumentó su propia votación inicial en casi un 50% al paso que su participación en el conjunto del electorado se incrementa en cerca de un 8%, siendo esta la única vez en la *historia chilena que un partido o coalición gobernante aumenta su caudal electoral durante el transcurso de su mandato*. En lugar del clásico problema del

<sup>26</sup> Para más detalles sobre la cuestión electoral, ver Gil, *op. cit.*, pp. 227-229. Petras, *op. cit.*, pp. 108-113. Los cambios en el régimen electoral son discutidos en Atilio Boron, "La evolución del régimen electoral y sus efectos en la representación de los intereses populares: el caso de Chile" en *Revista Latinoamericana de Ciencia Política*, II, N° 3, 1971, pp. 395-436. En relación al voto femenino debe recordarse que el mismo fue garantizado en 1949 y que fue el año 1952, con ocasión de la elección presidencial de ese año, la primera vez que las mujeres participaron en elecciones nacionales.

Cuadro 1

TENDENCIAS EN LA INSCRIPCIÓN ELECTORAL, EN LA VOTACIÓN TOTAL Y EN LA RADICALIZACIÓN  
POLÍTICA DEL ELECTORADO, 1952-1973

Año	Electores inscritos			Electores que votaron			Votos de izquierda		
	Número absoluto	Índice 1952-100	Número absoluto	Índice 1952-100	Número absoluto	Índice 1952-100	% sobre votos válidos		
1952	1 105 029	100.0	957 102	100.0	51 975	100.0	5.5		
1958	1 497 902	135.6	1 250 350	130.6	356 493	685.9	28.9		
1964	2 915 121	263.8	2 530 697	264.4	977 902	1 881.5	38.9		
1970	3 539 747	320.3	2 954 799	308.7	1 075 600	2 069.5	36.6		
1973	4 538 851	410.7	3 661 898	382.6	1 589 025	3 057.3	44.0		

FUENTE: Dirección del Registro Electoral, Resultados Oficiales de las Elecciones Presidenciales de los años 1952, 1958, 1964 y 1970 y la Elección de Diputados del año 1973.

Nota: Bajo la denominación "votos de izquierda" se ha computado los sufragios emitidos en favor de Salvador Allende en las cuatro elecciones presidenciales que se está considerando. Para la elección de Diputados del año 1973 se han incluido todos los votos recibidos por los partidos integrantes de la Unidad Popular, es decir, los partidos Socialista, Comunista, Radical, Mapu, Izquierda Cristiana y Acción Popular Independiente. El 0.28% obtenido por la Unión Socialista Popular, cuya representación parlamentaria se alineaba junto con la UP, no fue incluido en la cifra arriba indicada.

“desgaste” causado por el ejercicio de la autoridad nos encontramos con el extraño caso del fortalecimiento de la coalición de gobierno. La izquierda se manifestó así capaz de captar buena parte de los votos de los nuevos electores, inscritos luego de las reformas de 1970, y profundizar su respaldo entre los obreros, pobladores y campesinos atrayendo a muchos de ellos a sus filas por primera vez.<sup>27</sup>

Una última observación antes de concluir con esta sección: el voto izquierdista se mantuvo estacionario en el periodo 1964-70, que es justamente aquel caracterizado por una baja en el ritmo de expansión del electorado y, por otro lado, corresponde a los años de gobierno de la democracia cristiana. Entre 1958 y 1964 es indudable que la “cédula única” disminuyó drásticamente el impacto del cohecho —especialmente en las áreas rurales— y facilitó a vastas secciones de las clases populares la expresión libre de sus preferencias políticas. Al mismo tiempo, vale señalar que la remoción de prácticas exclusivistas y de arbitrios burocráticos utilizados para frustrar la inscripción electoral coadyuvaron a expresar el sentir de las masas. Sin embargo, en el sexenio 1964-70 los partidos marxistas no lograron mantener la dinámica que traían del periodo anterior. En parte, esto podría entenderse como la resultante natural del serio revés electoral sufrido en 1964 y que obligó a la izquierda a replantearse sus análisis de la situación nacional, sus estrategias de lucha, sus formas organizativas, su eficiencia como instrumento de movilización popular. También es cierto que la demagogia reformista contribuyó en no poco grado a confundir y desorientar aún más a las clases populares, ya de por sí confundidas y desorientadas por los desaciertos y vacilaciones de su propia vanguardia durante la campaña electoral de dicho año.<sup>28</sup> Algunos elementos de las clases populares fueron atraídos y embaucados por efectivos y costosos trucos publicitarios. Una campaña propagandística sin precedentes se desató en Chile en las vísperas de las elecciones presidenciales de 1964. Macizamente apoyada y difundida a través de los aparatos ideológicos de la burguesía, dicha propaganda contó con la “benévola y desinteresada” financiación del capital monopolo-

<sup>27</sup> No vamos a escandalizarnos ni a rasgarnos las vestiduras por las recientes declaraciones del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) William E. Colby en relación a la “ayuda” prestada para el “mantenimiento de las instituciones democráticas” en Chile. Cualquiera medianamente informado en Chile ya lo sabía; por ello es que tales revelaciones no descubren nada nuevo. Sirven, eso sí, para desnudar el carácter moral y la vileza de muchos de los celosos guardianes de la “libertad y la democracia”. Sirven además para que algunos sociólogos, analistas políticos y economistas obnubilados por sus prejuicios se den cuenta de la trascendencia que reviste el análisis del imperialismo para la comprensión de la realidad latinoamericana.

<sup>28</sup> Ver Alejandro Chelén Rojas, *op. cit.*, pp. 162-174.

lista y el imperialismo.<sup>29</sup> En todo caso, este reflujo de la izquierda fue efímero y las masacres populares que tuvieron lugar en el sexenio de la "revolución en libertad" desnudaron el verdadero carácter de clase de un régimen que se había autoerigido en el mesías de las masas y desengañaron a muchos sectores de las clases populares que habían sido sorprendidos por la sutil propaganda. Más de treinta obreros, pobladores y campesinos; niños, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, en Santiago, El Salvador o Puerto Montt, murieron bajo las fuerzas represivas durante la administración de Frei; con ellos también moría la viabilidad del reformismo burgués.

Luego de 1970, los esfuerzos sistemáticos y conscientes de los principales partidos de la Unidad Popular y el gobierno aceleraron la movilización popular y profundizaron la organización del proletariado, acciones éstas que deben tenerse muy en cuenta al intentar explicar las razones del renovado poderío electoral de la Unidad Popular en las difícilísimas circunstancias que rodearon las elecciones parlamentarias de 1973.

En resumen podríamos decir entonces que los rasgos más salientes de los aspectos electorales de la movilización política de las clases populares chilenas se sintetizan en la siguiente secuencia: extensión de la movilización política (más estratos dentro de las clases populares son "contagiados" por el proceso); masificación de la política y ampliación de las bases sociales del Estado; progresivo deterioro de las alternativas políticas de la burguesía luego del frustrado experimento de la restauración alessandrista y del fracaso del reformismo democristiano; desplazamiento del electorado y del sistema partidista hacia la izquierda e inauguración de la transición hacia el socialismo en 1970.

#### b) *Organizaciones populares y conflictos de clase*

Hasta ahora hemos limitado nuestra exposición a las consecuencias electorales de la movilización política; veremos a continuación otro aspecto de

<sup>29</sup> Ver Wolpin, "La influencia internacional", *op. cit.*, pp. 476-477. Consúltese también la revista *Time* (septiembre 30, 1974) en donde narra algunos entretelones de la acción de la CIA en Chile. Otra fuente digna de ser examinada es el libro de Víctor Marchetti y John D. Marks, *The CIA and the cult of Intelligence*, Nueva York, 1974, que entre sus muchos méritos ostenta el de ser el primer libro en la historia de los Estados Unidos sometido a censura previa por parte del gobierno. La Corte Federal aceptó la petición de la CIA en lo referente a la supresión de 168 pasajes del libro cuya publicación lesionaría la "seguridad nacional", según lo expresado por el Gobierno Federal. Varios de los pasajes censurados se hallan intercalados en secciones del libro dedicadas a la intervención de la CIA en Chile. Otra fuente que también merece ser releída a la luz de los acontecimientos posteriores a su publicación es la colección de *Documentos secretos de la ITT*, Santiago, 1972.

crucial importancia: el desarrollo de una red de organizaciones de clases capaces de canalizar los impulsos de los estratos recientemente movilizados y darles una expresión orgánica. Asimismo trataremos de presentar algunas indicaciones sobre la evolución de los conflictos entre asalariados y patrones a fin de relacionar la exposición anterior y la actual con las características contemporáneas de la lucha de clases.

El desarrollo de las organizaciones de clase siguió en Chile una trayectoria que, brevemente, puede describirse de esta manera: la primera fase de la industrialización se tradujo en una notable expansión del número de trabajadores organizados, al punto que los asociados a los sindicatos se triplicaron entre 1932 y 1939, pasando de casi 55 000 a unos 173 000. Claro está que el impacto de la Gran Depresión sobre las actividades mineras había traído como consecuencia una drástica disminución en el número tanto de obreros ocupados en los yacimientos como de trabajadores organizados en sindicatos, todo lo cual contribuyó a magnificar el crecimiento real alcanzado hasta 1939, puesto que en 1932 se partía de una base excepcionalmente deprimida. Sin embargo, el vigoroso crecimiento de las organizaciones de clases del proletariado prosiguió en la década siguiente y así en los años de la posguerra se contaba con más de 260 000 trabajadores asociados a los sindicatos. Luego de estos tres lustros de expansión, el movimiento obrero entró en una fase de relativo estancamiento en lo que respecta a su volumen cuantitativo: hubo ocasionales ascensos y descensos en el número de afiliados, el que llega a su punto más bajo en 1960. Luego se iniciaría una fase de rápida recuperación a partir de 1966. Si bien es cierto que el carácter de la industrialización chilena difícilmente podría haber creado condiciones favorables para el surgimiento pujante del movimiento obrero, no es menos cierto que las innumerables restricciones y limitaciones legales para la organización de los sindicatos jugaron un papel muy significativo en su lento desarrollo. A los empleados públicos les era prohibido organizarse en sindicatos, estando sólo facultados para crear "asociaciones" cuya efectividad como arma de lucha era menor aún que la de los sindicatos legales. Éstos, por su parte, podían crearse tan sólo en el sector privado y eso luego de sortear una telaraña kafkiana de preceptos y reglamentaciones cuya única finalidad era precisamente la de impedir que se constituyera un movimiento sindical poderoso. La CUT carecía de reconocimiento legal, resintiéndose de esta manera su capacidad ejecutiva como órgano de centralización y conducción superior del movimiento obrero. Como éstas había muchas otras trabas cuya enunciación sería tedioso efectuar aquí, pero acerca de cuyos propósitos pocas dudas caben, puesto que la gran mayoría de ellas procuraba entorpecer los

esfuerzos de organización del proletariado y acentuar hasta el límite las tendencias divisionistas que pudieran existir en su seno.<sup>30</sup>

La política seguida por la Democracia Cristiana durante su administración fue muy clara: intentó penetrar y dividir la conducción unitaria de la clase obrera, al tiempo que mantenía las trabas que impedían la extensión de la organización a sectores más vastos del proletariado industrial. A tales labores estuvo expresamente dedicado el Ministerio de Trabajo y tanto celo puso la administración oficial en esta causa que las tareas más específicas del ministerio, como ser la mediación y conciliación de los conflictos de trabajo, tuvieron que ser atendidas por el Ministerio del Interior durante los primeros años del gobierno de la democracia cristiana. Va de suyo que todas estas maniobras se realizaban invocando los más elevados ideales, al punto que el Ministro de Trabajo no se cansaba de repetir que se estaba garantizando la "libertad de trabajo", cuando en realidad se canalizaban fondos fiscales y personal de la administración pública nacional en la promoción del "paralelismo sindical". La estratagema no resultó y no sólo fue repudiada por las organizaciones populares sino también por influyentes líderes progresistas dentro del propio partido oficialista.<sup>31</sup> El objetivo que se perseguía era liquidar la influencia marxista en la clase obrera, despojar a los partidos de izquierda de sus bases sociales y conquistar una masa electoral que había sido particularmente refractaria al llamado de la democracia cristiana. Con propósitos similares pero adecuando la táctica a una realidad de clase distinta se procuró organizar al campesinado y a las masas urbanas. Campesinos y pobladores constituían estratos de las clases populares en donde la penetración de la izquierda era más reciente y en donde, para la democracia cristiana, las perspectivas de hallar una sólida base electoral parecían más promisorias. Se cambió la legislación que en la práctica imposibilitaba la sindicalización campesina y se canalizaron muchísimos recursos destinados a entrenar líderes sindicales y organizar sindicatos rurales. Con los pobladores sucedió otro tanto y era una oficina dependiente del mismísimo Presidente de la República, el Consejo Nacional de Promoción Popular, la que estaba encargada exclusivamente de crear una amplia red de

<sup>30</sup> Alan Angell, *Politics and the Labour Movement in Chile*, Londres, 1972, pp. 11-41.

<sup>31</sup> Cabe señalar que mientras el gobierno alentaba el "paralelismo sindical" entre las clases populares se cuidaba muy bien de perseguir propósitos semejantes en relación a las organizaciones patronales; da la impresión de que el supuesto implícito en las diversas políticas gubernamentales era que la división de la base producía los mismos bienhechores que la unidad de la cúspide. Es decir, paralelismo y pluralismo sí, pero para los sectores populares.

organizaciones populares adictas al gobierno.<sup>32</sup> Las tácticas empleadas por el gobierno de la Democracia Cristiana en relación a los obreros, campesinos y pobladores se inscriben dentro de una estrategia global dirigida a aglutinar un frente de apoyo popular que le permitiera, en primer lugar, desplazar a los partidos marxistas e imponer su dominio y dirección ideológica sobre vastos segmentos del proletariado, especialmente aquellos que recientemente habían irrumpido en la escena política y sobre los cuales la influencia de la izquierda no se hallaba tan sólidamente establecida como entre los obreros industriales y mineros. Se trataba entonces de garantizar una base de apoyo para el gobierno aprovechándose de la existencia de “masas disponibles” todavía carentes de organización, tradición política marxista y conciencia de clase.<sup>33</sup> En segundo término, la Democracia Cristiana suponía que si esta estrategia resultaba exitosa iba a estar en condiciones de contar con un contingente electoral propio, lo que le permitiría adquirir una mayor independencia respecto de la derecha política tradicional. Ésta todavía mantenía un control precario sobre una clientela cuyo número se había ido reduciendo continuamente y que se reclutaba especialmente a través de la manipulación del voto agrario. Esta masa electoral fue canalizada en favor de Frei en 1964 y muchos dirigentes del PDC pensaron que ella podría formar un sólido apoyo campesino para las políticas reformistas del gobierno. Huelga añadir que esta autonomía de los partidos políticos de la derecha, tan anhelada por el PDC, no quería en absoluto significar una intención de liberarse del padrinazgo de la “derecha económica”; antes bien, era la imposición del propio proyecto de dominación del capital monopolista lo que requería constituir un partido con una amplia base de masas a fin de poder prescindir de la clientela de —y de los compromisos con— la decadente oligarquía terrateniente. Como muchos otros, este programa de la Democracia Cristiana no rindió los frutos esperados y a pesar de los esfuerzos de la burocracia estatal estas organizaciones de campesinos y pobladores se volvieron en gran medida en contra de sus “promotores”.

Desafortunadamente no existe suficiente información acerca del desarrollo organizacional de las clases populares, especialmente en los últimos años. Una de las razones que explica esta carencia es que, luego de 1970 y al calor

<sup>32</sup> Sobre los cambios en lo relativo a la legislación campesina, ver Affonso, *op. cit.*, tomo I, pp. 13-63. Sobre los pobladores, ver Joaquín Duque y Ernesto Pastrana, “La movilización reivindicativa urbana de los sectores populares en Chile: 1964-1972” en *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales*, N° 4, diciembre 1972, pp. 259-293.

<sup>33</sup> Sobre el concepto de “disponibilidad” y su relación con la teoría general de la movilización social, ver G. Germani, “Los procesos”, *op. cit.*

de la exacerbación del conflicto de clases, se produjo un impresionante crecimiento de las organizaciones populares y, más aún, surgieron nuevos tipos de estructuras tales como los Cordones Industriales, la JAP (Juntas de Abastecimiento y Control de Precios), los Consejos Comunales Campesinos y los Comités de la Unidad Popular (CUP) que adquirieron singular importancia en diferentes fases del gobierno popular. Como decíamos, es difícil estimar con alguna precisión el encuadramiento de masas que poesía cada una de estas distintas estructuras organizativas de las clases populares. Pese a ello, varios observadores y comentaristas han señalado repetidamente que bajo el gobierno de Allende se produjo una verdadera eclosión en el número de tales organizaciones y en la cantidad de sus miembros, y la escasa evidencia empírica disponible parece abonar tal aserto. La evolución de la sindicalización campesina, por ejemplo, es muy ilustrativa: de unos 1 600 campesinos organizados en sindicatos en 1964 se pasa a 127 688 en 1970, 253 531 en 1971 y cerca de 300 000 en 1972.<sup>34</sup> Del mismo modo, el número total de trabajadores sindicalizados comenzó a crecer muy rápidamente a fines de los años sesenta, pasando de unos 406 186 en 1967, a 531 086 en 1970 y a 717 541 en 1972.<sup>35</sup> En otras palabras, la pertenencia a los sindicatos casi se duplicó entre 1967 y 1972, a pesar de las barreras legales y las maniobras políticas tendientes a impedir la formación de un movimiento obrero fuerte y unificado. Estas cifras del número total de sindicalizados deben ser consideradas como una estimación más bien conservadora por cuanto ellas sólo incluyen a los sindicatos "legales" y descartan, por lo tanto, a los efectivos enrolados en las "asociaciones" de trabajadores del sector público y de las empresas autónomas del estado. Si esos obreros y empleados fueran incluidos en nuestros cómputos tendríamos entonces un total de 1 068 912 trabajadores sindicalizados, es decir, casi el 38% de la población económicamente activa en 1972.<sup>36</sup> Por otra parte es importante tener presente que esta última cifra excluye a los obreros organizados en sindicatos "ilegales" del sector privado, es decir, aquellos que se forman en pequeñas fábricas o talleres en donde no trabajan más de 25 obreros, y que a pesar de carecer de personería jurídica desempeñan una misión equivalente a la de los sindicatos legalmente reconocidos. Naturalmente tampoco

<sup>34</sup> Las cifras hasta 1970 fueron tomadas del informe oficial de la Corporación de la Reforma Agraria (CORA), *Reforma Agraria Chilena*, Santiago, 1970, p. 26. Las cifras de 1971 y 1972 provienen de un estudio efectuado por Jorge Echenique y Sergio Gómez —en base a cifras oficiales— y publicado en *Chile Hoy*, semana del 3 al 9 de noviembre de 1972, N° 21, p. 20.

<sup>35</sup> Cifras de la Dirección General del Trabajo. Los datos del año 1972 fueron tomados de C. Blest, *op. cit.*, p. 15.

<sup>36</sup> Blest, *op. cit.*, p. 15.

está incluido en estas cifras el gran número de asociados a las Juntas de Vecinos y otros nucleamientos similares que a fines de la década del sesenta jugaron un papel notable en la organización de los pobladores y en muchos casos se transformaron en vehículos de la expresión de las reivindicaciones populares. Una idea de la relevancia política de las juntas vecinales se hace evidente cuando se tiene en cuenta que cerca de un tercio de los habitantes del Gran Santiago vivía a mediados de 1966 en áreas marginales (“callampas” o “poblaciones”) en las cuales, bien por la acción gubernamental o por el impulso procedente de los partidos de la izquierda, existían las juntas o algún otro tipo de organización popular.<sup>37</sup>

La otra cara de la moneda en esta movilización y creciente desarrollo organizacional de las clases populares chilenas está dada por el no menos rápido aumento en el número de instancias específicas del conflicto de clases, manifestado en una variedad de modalidades, como huelgas, tomas y ocupaciones de fundos, establecimientos comerciales o industriales y terrenos urbanos. Es razonable pensar que este impresionante ascenso en la combatividad de las clases populares reflejó no sólo la protesta espontánea

## Cuadro 2

TENDENCIAS EN LA EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE HUELGAS Y HUELGUISTAS, CONFLICTOS ECONÓMICOS Y TRABAJADORES AFILIADOS A LOS SINDICATOS, CHILE, 1947-1970

Años	Número de huelgas (A)	Número de huelguistas (B)	Número de conflictos económicos (C)	Número de afiliados a sindicatos (D)
1947-50*	121	44 603	...	261 100
1950	192	...	818	260 143
1951	185	} 109 359*	858	264 481
1952	201		1 065	284 418
1953	208		1 431	298 274
1954	305		1 794	299 364
1955	275		127 626	1 781
1956	147	105 438	1 428	317 352

(\*) Promedio de los años abarcados por el asterisco.

<sup>37</sup> J. Duque y E. Pastrana, *op. cit.*, p. 265. Ver también Jorge Giusti, “La formación de las ‘poblaciones’ en Santiago: aproximación al problema de la organización y participación de los ‘pobladores’”, en *Revista Latinoamericana de Ciencia Política*, vol. II, Nº 2, agosto 1971, p. 380.

Años	Número de huelgas (A)	Número de huelguistas (B)	Número de conflictos económicos (C)	Número de afiliados a sindicatos (D)
1957	80	26 388	1 066	300 040
1958	120	44 759	1 127	276 346
1959	174	62 789	1 134	282 498
1960	257	88 418	1 899	232 417
1961	262	111 911	1 874	257 563
1962	401	84 212	1 669	247 007
1963	413	121 308	1 495	262 498
1964	564	138 474	1 939	270 542
1965	723	182 359	2 931	292 653
1966	1 073	195 435	3 181	350 516
1967	1 114	225 470	3 763	406 186
1968	1 124	292 794	3 441	499 761
1969	1 277	362 010	3 941	530 784
1970	1 819	656 170	5 295	551 086

FUENTES: Para 1947-1950 y el promedio de huelguistas en 1951-1954, los datos fueron tomados de Instituto de Economía, *Desarrollo económico de Chile 1940-1956* (Santiago, 1956), p. 7. El resto de la columna A fue tomado de Enrique Sierra, *Tres ensayos de estabilización en Chile*, (Santiago, 1969), p. 140. Como los datos de Sierra sólo llegan hasta 1966 fueron complementados y verificados con las cifras oficiales de la Dirección General del Trabajo. Lo mismo fue hecho con respecto a las columnas B y C. La columna D fue tomada de informes oficiales de la Dirección General del Trabajo.

NOTAS: (...) No hay datos disponibles para tal año.

La columna A, número de huelgas, incluye solamente las huelgas legales o ilegales declaradas exclusivamente por sindicatos legales. Por lo tanto, los paros producidos por las organizaciones campesinas, "asociaciones" de empleados públicos o sindicatos no legales no han sido tomadas en cuenta. De hecho las huelgas campesinas tendrían que haber sido registradas por los organismos pertinentes luego de la legalización del sindicalismo campesino acaecida en 1967, pero nuestra sospecha es que tan sólo una ínfima parte de las huelgas campesinas fueron debidamente registradas. La columna A tampoco incluye huelgas de menos de un día de duración ni las que se producen como consecuencia de una huelga general. La columna B indica el número de huelguistas pertenecientes a los sindicatos legales. La información suministrada bajo la columna C es bien ilustrativa del tamaño, del iceberg que subyace por debajo de las estadísticas de huelgas "oficialmente registradas". En dicha columna se incluyen todos los conflictos producidos entre asalariados y patronos, algunos de los cuales posteriormente originan las huelgas registradas en la columna A mientras que otra parte sustancial puede dar lugar a conflictos declarados por sindicatos ilegales y por lo tanto no son recogidos por las estadísticas oficiales. Por último, una cierta fracción de esos conflictos puede resolverse por la vía de la conciliación sin que necesariamente se llegue a la huelga. La columna D incluye solamente a los miembros de los sindicatos legales.

de las masas sino también el vigor de sus organizaciones de clase; por otra parte, en el desenvolvimiento mismo de esta lucha se fueron formando nuevas estructuras de movilización, organización y liderazgo que a su vez contribuyeron a dinamizar este proceso. Examinemos ahora, primeramente, algunos materiales relativos a los conflictos del trabajo y a la expansión del movimiento obrero.

Las cifras contenidas en el cuadro 2 pese a las limitaciones existentes en la cobertura de la totalidad de los conflictos del trabajo, muestran de modo convincente el brusco aumento de la combatividad del proletariado —especialmente a partir de 1966— y su creciente capacidad para oponerse tanto al gobierno como a las clases propietarias. Si se observa el desarrollo del movimiento obrero a lo largo de esos años se verá que hay tres fases que, con el margen de arbitrariedad inherente a todo intento de periodización histórica, se podrían delimitar de la siguiente manera: una primera etapa de unificación y lenta consolidación que se extiende desde los años de la posguerra hasta 1955; un segundo estadio, donde se produce un retroceso notorio y el movimiento obrero cede parte de las posiciones que había conquistado en años anteriores. Este período se extiende entre 1956 y 1965. Finalmente, una tercera etapa marcada por un sostenido ascenso en la lucha de clases y una ofensiva del movimiento popular y que es iniciada en 1966 y alcanza su madurez con el triunfo de la Unidad Popular en 1970.

La etapa de unificación y consolidación del movimiento obrero se desenvuelve dentro del marco represivo que caracterizó la gestión de gobierno de González Videla: legislación antisindical para los trabajadores agrícolas (Ley 8 111 de 1947); proscripción del Partido Comunista y persecución de toda la izquierda y sucesivas leyes de facultades extraordinarias configuran el terreno en el cual habría de germinar la vocación unitaria del proletariado. La crisis política que acarreó la violenta ruptura de la coalición frentista produjo no sólo la desarticulación de los partidos de izquierda sino que también arrastró en sus aguas tanto a los radicales como a los partidos tradicionales de los sectores oligárquicos. En esta coyuntura crítica la figura mesiánica de Ibáñez fue capaz de aglutinar a su alrededor el descontento y la desorientación de las masas populares cuyos votos lo catapultaron a la presidencia con una de las mayorías más abrumadoras que se registraron en la historia política de Chile. El ascenso del ibañismo cambió significativamente las condiciones políticas bajo las cuales la clase obrera iba a dar su lucha por la unidad. Por cierto tiempo el nuevo gobierno no sólo dejó de aplicar la legislación represiva (que sólo derogaría al final de su mandato, en 1958) sino que estimuló los esfuerzos de las distintas fracciones del movimiento obrero que se hallaban empeñadas en constituir un organismo

unitario. El apoyo oficial se explicaba en parte por lo siguiente: siendo el ibañismo una heterogénea coalición de partidos, contaba en su seno con grupos de muy diversa orientación e ideología. Entre ellos, sobresalía como uno de los pocos bien organizados el Partido Socialista Popular, una de las dos fracciones principales en que se hallaba dividido el socialismo chileno y que en las elecciones de 1952 había apoyado la candidatura de Ibáñez. Al PSP le cupo la responsabilidad de hacerse cargo del Ministerio de Trabajo, tarea que recayó sobre Clodomiro Almeyda, desde donde se impulsaron decididamente los esfuerzos previos a la fundación de la CUT concretada finalmente en febrero de 1953. Sin duda, la creación de este organismo marca el hito más importante de esta primera etapa del movimiento obrero chileno desde la posguerra. El impulso de esta fase ascendente se prolongaría un par de años más, pero ya con un cuadro económico muy cambiado —recesión y aceleración inflacionaria— y con un populismo que, agonizante, se había desembarazado de sus vinculaciones con los sectores obreros y optó por la ortodoxia liberal y la reconciliación con las clases dominantes, las que, digámoslo enfáticamente, jamás se alarmaron en demasía por la retórica reformista de Ibáñez. Los socialistas populares abandonaron el gobierno en octubre de 1953 y ya en mayo del año siguiente la CUT declaró su primera huelga general. Una segunda es convocada en julio de 1955 y, al igual que la primera, recibe el apoyo entusiasta de los trabajadores. Sin embargo, la desenfadada espiral inflacionaria y la insensibilidad gubernamental ante los reclamos populares obliga a la CUT a proclamar un nuevo paro general en enero de 1956 que fracasa completamente y precipita un desordenado repliegue del movimiento obrero.

La magnitud del retroceso experimentado por el movimiento sindical en su segunda etapa —que se extiende entre 1956 y 1965— puede apreciarse sin dificultad en el cuadro 2. El año 1957 marca el punto más bajo en lo relativo al número de huelgas y huelguistas mientras que los conflictos económicos también registran uno de los valores más bajos del periodo. En lo que respecta al número de obreros asociados a los sindicatos se observa que su nivel más bajo se registró en el año 1960. Aparentemente, esto puede deberse al retraso con que los efectos de una coyuntura económica dada se propagan al volumen numérico del movimiento obrero en comparación con el impacto casi inmediato que produce en el número de huelgas o de huelguistas. El año 1960, cuando la CUT convoca su cuarta huelga general y la primera luego de la derrota sufrida en 1956, marca el comienzo de una lenta recuperación cuya línea ascendente se acelera en 1964 y 1965 hasta alcanzar llamativa pujanza luego de los paros generales de marzo de 1966 y noviembre de 1967.

Se entra así de lleno a la tercera etapa en la evolución del movimiento obrero. Aquí encontramos el ascenso de la lucha popular expresado no sólo por los obreros industriales y los mineros sino también por el campesinado, tradicionalmente al margen de un rol protagónico en el conflicto de clases. Se produce entonces una verdadera avalancha de huelgas, paros, pliegos de peticiones y todo tipo de conflictos económicos que involucran a sectores cada vez más amplios de las clases populares así como de los estratos medios (especialmente los empleados particulares y fiscales y la pequeña burguesía intelectual). Entre 1966 y 1970 casi se duplicó el número de huelgas y conflictos económicos, se triplicó el de huelguistas, al paso que los miembros de los sindicatos legales crecieron en más de cincuenta por ciento. Este proceso adquirió mayor intensidad todavía en el último año del periodo, en vísperas del triunfo de Salvador Allende, revelando así de manera muy clara que lo que estaba en juego en las elecciones de ese año no era un simple relevo de presidentes sino el rumbo histórico que iría a adoptar el pueblo chileno en esa singular encrucijada a que había llegado en 1970.<sup>38</sup>

A fin de apreciar de modo correcto el alcance de estos cambios en el volumen numérico del movimiento obrero veremos a continuación cómo evolucionó la proporción de la población económicamente activa que se encuentra afiliada a sindicatos; en otras palabras, trataremos de ver si el aumento cuantitativo de los trabajadores organizados implicó una expansión real por encima del simple crecimiento vegetativo de los asalariados. En el cuadro 2 habíamos notado que el número absoluto de afiliados a los sindicatos se duplicó en los veinte años transcurridos entre 1950 y 1970. Ahora bien, si se consideran esos valores en relación a la fuerza de trabajo en condiciones de sindicalizarse, la importancia y magnitud real del crecimiento de la organización sindical podrán ser aquilatados en su justa dimensión. El cuadro siguiente intenta aportar algunos antecedentes al respecto.

Como puede apreciarse, este cuadro corrobora lo anteriormente señalado acerca de la expansión del movimiento obrero, especialmente en los años de la década del sesenta. La tasa efectiva de sindicalización se duplicó en diez años y esto, ya de por sí, es un indicio valioso para comprender el significado de la coyuntura política que se plantearía en los comienzos de los años setenta. Sin embargo, caeríamos en un serio error si no advirtiésemos que estas cifras representan una aproximación tentativa que, por sus propias deficiencias, tiende a subestimar seriamente la tasa real de afiliación sindical.

<sup>38</sup> Sobre la CUT y las huelgas generales, véase Manuel Barrera, "Perspectiva histórica de la huelga obrera en Chile", *Cuadernos de la Realidad Nacional*, N° 9, septiembre de 1971, pp. 119-155.

Cuadro 3

## PROPORCIÓN DE EMPLEADOS Y OBREROS AFILIADOS A LOS SINDICATOS

<i>Años</i>	<i>Promedio quinquenal de afiliados (A)</i>	<i>Número total de emplea- dos y obreros (B)</i>	<i>% de A/B</i>
1950-54	281 336	1 333 247	21.10
1958-62	259 166	1 543 145	16.79
1968-72	560 143	1 659 560	33.75

FUENTE: Columna A, ver cuadro 2. Columna B: Censos de 1952, 1960 y 1970.

NOTA: Las cifras de la columna A son un promedio del número de afiliados en el quinquenio correspondiente, cuyo año central es aquel en el cual se levantó el censo de población. Cabe recordar que sólo se han considerado a aquellos trabajadores afiliados a los sindicatos legales, tal como fuera indicado en el cuadro precedente.

En la columna B se ha incluido exclusivamente a empleados y obreros, descartándose por lo tanto a los empleadores, los trabajadores por cuenta propia y los empleados domésticos. Por lo tanto, no debe confundirse estas cifras con las de la población activa.

Esto sucede porque no todos los empleados y obreros están en condiciones de asociarse a un sindicato; por lo tanto, el número de "sindicalizables" es bastante menor del total de empleados y obreros. En primer lugar, porque el censo considera en la población activa a los individuos que siendo mayores de 12 años de edad tienen una ocupación, se encuentran cesantes o buscan trabajo por primera vez. Dado que el límite de edad mínimo para afiliarse ha sido fijado por ley en los 18 años, toda la cohorte comprendida entre los 12 y los 18 años debería ser excluida de la población "sindicalizable". Segundo, bajo la categoría genérica de "empleados" el censo incluye a gerentes y administradores, los cuales, por razones obvias, tampoco deberían ser computados a los efectos de nuestro análisis. Tercero, porque están incluidos los trabajadores de la administración pública, los empleados públicos y miembros de las fuerzas armadas, carabineros y personal de investigaciones, los que, por diversas razones, se hallan privados de su capacidad para organizarse sindicalmente. Por último, el censo no indica qué proporción de los obreros y empleados trabajan en empresas que ocupen más de 25 personas, lo cual constituye el mínimo de personal necesario para organizar un sindicato legal.

La imposibilidad práctica de obtener los datos necesarios para realizar una estimación más precisa nos ha movido a presentar los materiales del cuadro 3 a título puramente ilustrativo y como una primera aproximación

para establecer a *grosso modo* la tasa de afiliación sindical a lo largo de un periodo de veinte años. Algunos estudios más detallados han demostrado que si se controlan convenientemente estos factores distorsionantes, los resultados pueden sufrir cambios de suma importancia. Así por ejemplo, una investigación realizada en base a datos correspondientes al año 1967 encontró que el 75.1% de la población ocupada en establecimientos industriales que ocupan más de 25 personas se hallaba sindicalizado. Al mismo tiempo, diferencias apreciables surgieron cuando se analizaron las tasas de sindicalización en las distintas ramas económicas.<sup>39</sup>

Una vez establecida la magnitud real de los cambios en el tamaño del movimiento obrero es necesario detenerse por unos momentos en el examen de los datos relativos a la huelga obrera contenidos en el cuadro 2. Es bien sabido que ésta refleja más que nada la capacidad de los núcleos obreros mejor articulados y en cierto sentido puede argumentarse que la trayectoria histórica de las huelgas induciría a errores en la apreciación del grado de movilización política de las clases populares en su conjunto, dado que se están manejando indicadores que corresponden a sus segmentos mejor organizados. No obstante, una atenta mirada a las estadísticas relativas a la huelga campesina confirma la validez y generalidad de las conclusiones extraídas a partir de los datos recientemente examinados.

## Cuadro 4

## NÚMERO DE HUELGAS DE OBREROS AGRÍCOLAS, 1960-1970

1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
3	7	44	5	39	142	586	693	648	1 127	1 580

FUENTE: Para los años comprendidos entre 1960 y 1966, Almino Affonso, Sergio Gómez, Emilio Klein y Pablo Ramírez, *Movimiento campesino chileno*, (Santiago, ICIRA, 1970), tomo 2, p. 58. Para los años 1967 a 1970, Emilio Klein, *Antecedentes para el estudio de los conflictos colectivos en el campo*, (Santiago, ICIRA, 1972).

NOTA: Incluye huelgas legales e ilegales, tanto para los años anteriores a la reforma de la legislación sobre sindicalización campesina (1967) como en los posteriores a tal fecha.

Como puede comprobarse, la evolución de la huelga campesina revela que en realidad se estaba subestimando la magnitud de la rebelión de los trabajadores agrícolas. El cuadro 4 indica el dramatismo y la brusquedad

<sup>39</sup> Ver Francisco Zapata, *Estructura y representatividad del sindicalismo en Chile*, Santiago (mimeo), ILPES, 1968, p. 124.

que tuvo este “despertar campesino”: reprimidos durante décadas, a poco más de treinta años de la masacre de Ranquil (1934), los trabajadores de la tierra se aprestaban a convertirse en un actor protagónico de la historia nacional. La experiencia reformista de la Democracia Cristiana iría a crear las condiciones favorables para ello.

Las tomas de fundos y las ocupaciones de fábricas o sitios urbanos constituyen otra faceta de la movilización popular. Los datos siguientes, referidos a un periodo más breve que los materiales de los cuadros precedentes, son suficientemente ilustrativos de la intensidad que cobró el conflicto de clases en los últimos años de la década del sesenta.

Cuadro 5

## TOMA DE FUNDOS, SITIOS URBANOS Y FÁBRICAS, 1968-1970

	1968	1969	1970
Fundos	16	121	368
Sitios urbanos	15	26	352
Fábricas	5	24	133

FUENTE: Dirección General de Carabineros, *Informe al Senado*, 1971.

Este súbito crecimiento en la capacidad de lucha de las fracciones tradicionalmente menos organizadas y combativas de las clases populares es muy elocuente y ahorra mayores comentarios; la progresión de las tomas de fundos y sitios urbanos revela que, a fines de la década del sesenta, nuevos actores se habían incorporado activamente a las luchas sociales que desde mucho tiempo antes venían llevando a cabo los sectores de vanguardia del proletariado. En las páginas finales de este trabajo procuraremos desenrañar el significado político de tales acontecimientos; las huelgas y las ocupaciones, así como muchas otras manifestaciones de la protesta popular, carecen de un sentido unívoco e inmanente. Sería demasiado ingenuo sostener que ellas representan necesariamente una negación revolucionaria de la sociedad de clases; pero mucho menos aceptable es el argumento liberal que afirma que la huelga obrera es una simple táctica utilizada para conseguir mejoras puramente salariales disociada de toda intencionalidad política. Así como la expansión del electorado adquiriría un significado político sólo cuando se lo interpretaba dentro de una totalidad concreta y determinada, de la misma manera debe procederse si es que se quiere descifrar el contenido político de la huelga obrera y otras expresiones de la protesta popular.

#### IV. EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA CONTINUIDAD HISTÓRICA DEL PROLETARIADO CHILENO

Los materiales que hemos examinado a lo largo de las secciones precedentes de este trabajo nos han demostrado el impulso ascendente que el movimiento popular había adquirido en las últimas décadas. Este fenómeno transformó en pocos años la faz de la política chilena, reproduciendo en varios frentes las líneas de antagonismo de clase (en el campo, en la fábrica, en los vecindarios), dinamizando el aparato político de la izquierda y exacerbando las contradicciones en el interior del bloque dominante.

En las páginas anteriores, al referirnos a las prácticas electorales, habíamos subrayado la magnitud de los cambios operados en lo relativo tanto a la incorporación de las clases populares a la lucha política como en lo que hace a su creciente radicalización, tal cual lo demuestra la evolución de la votación izquierdista. Al concentrarnos en el análisis de las huelgas y las ocupaciones —así como en la expansión del movimiento obrero— no es posible ni aconsejable olvidar la vinculación existente entre ambas formas de lucha popular: la propiamente electoral y la reivindicativa. Obreros, campesinos y pobladores, afiliados a los partidos de izquierda, votantes disciplinados de sus candidatos, activistas y organizadores de las múltiples ramas del aparato partidario eran a la vez líderes en las tomas de terrenos y sitios urbanos, en las ocupaciones de fábricas y fundos y en la organización de la huelga obrera. Es cierto que muchas veces se producía un desfase entre las presiones espontáneas de las masas y la respuesta orgánica de las organizaciones políticas, especialmente en fases de brusco ascenso en la lucha de clases. Pero la existencia de esa asincronía no necesariamente significaba que las clases populares, anticipándose a las directivas partidarias, agotaban sus reivindicaciones en demandas puramente “economicistas”. Por el contrario, en la mayoría de los casos ellas planteaban la necesidad de cambios radicales y urgían a los partidos a adoptar una “línea dura” en relación a las clases dominantes; es decir, las reivindicaciones se insertaban en el nivel de lo político.<sup>40</sup>

Claro está que no se desprende de lo anterior que esa “conciencia socialista” se desarrolló de modo homogéneo entre las diversas capas que componen el proletariado. En ciertos núcleos obreros, ligados a la industria fabril y a la minería, ella se plasmó con caracteres muy definidos y coherentemente articulados. En otros, una ambigua “situación de clase” daba

<sup>40</sup> La relación existente entre reivindicaciones populares y partidos y coyunturas políticas ha sido correctamente examinada en J. Duque y E. Pastrana, *op. cit.*, pp. 260-278.

ímpetus a modalidades “economicistas” de acción obrera. Por último, en algunos núcleos populares la cristalización de la “conciencia socialista” tropezaba con dos escollos: el paternalismo tradicional de las secciones más periféricas del proletariado y la retórica “comunitarista” sembrada por la Democracia Cristiana, gracias a la cual llegó a gozar del apoyo fugaz de sectores importantes del campesinado y los así llamados “marginales”. Sin embargo, esta heterogeneidad de la “conciencia socialista” de los diferentes estratos del proletariado fue muy afectada por el desarrollo de las distintas etapas de la lucha de clases en Chile. La intensificación del enfrentamiento que tiene lugar en las postrimerías de la década del sesenta, el triunfo electoral de la Unidad Popular y los dos primeros años de su gestión gubernativa, y la fase crítica que se inicia con la “insurrección de la burguesía” en octubre de 1972 desnudaron la inadecuación radical del “economicismo” y el “comunitarismo”. Ni el confinamiento de la acción obrera a la simple satisfacción de sus aspiraciones espontáneas ni la prédica de la armonía de intereses entre explotadores y explotados eran capaces de dar una respuesta positiva a los requerimientos que estaba planteando la nueva etapa del conflicto de clases. El resultado fue que sectores crecientes del proletariado tomaron conciencia de la necesidad de vincular sus reivindicaciones salariales, habitacionales, etc., con los intereses político-estratégicos de largo plazo de las clases populares: la conquista del poder del Estado.<sup>41</sup>

Ahora bien, esta “conciencia socialista” crecientemente diseminada en los diferentes estratos del proletariado en las fases más antagónicas del enfren-

<sup>41</sup> Sobre el tema de la conciencia obrera y su transformación en los últimos años ver Joan Garcés, “The Popular Unity Government’s Workers’ Participation Model: some conditioning factors” en J. A. Zammit, *op. cit.*, pp. 181-186. En el mismo volumen, consúltese también la ponencia del secretario general de la CUT, Luis Figueroa y la discusión subsiguiente (pp. 186-220). Alain Touraine, en su ya mencionada *Vie et Mort du Chili Populaire* se refiere largamente al “aumento” de la conciencia de clase. James Petras, por su parte, reseña lo que a su juicio constituyen elementos de una conciencia “economicista” en algunas categorías obreras. Véase su “Nacionalización, transformaciones socio-económicas y participación popular en Chile”, en *Cuadernos de la Realidad Nacional*, N° 11, enero de 1972, pp. 3-24. Por supuesto, no podríamos dejar de mencionar aquí al estudio realizado por Torcuato Di Tella et al *Sindicato y comunidad*, Buenos Aires, Editorial del Instituto, 1967, en donde se examina la conciencia de dos sectores muy distintos del proletariado chileno: los obreros de la moderna planta siderúrgica de Huachipato y los mineros del carbón de Lota. Aparte de sus muchos méritos, esta obra —por el hecho de estar fundada sobre un trabajo de campo efectuado en 1957— provee un valioso aporte para el análisis de la conciencia socialista en el período anterior a la plena movilización popular. Por último, véase también el trabajo de Franz Vanderschueren, “Polibloques y conciencia social”, *Revista Latinoamericana de Estudios Urbano-Regionales*, octubre 1971, pp. 95-123.

tamiento clasista no se desarrolló al margen de las determinaciones económicas fundamentales que marcaron la historia de las luchas populares en Chile. Por el contrario, el aumento de la explotación del trabajo, el agravamiento de las desigualdades existentes entre las distintas clases y grupos sociales y el mantenimiento de irritantes injusticias se hallan en la base misma de la precipitada toma de conciencia de vastos sectores de las clases populares. Su movilización se liga indisolublemente al fracaso de la industrialización chilena en asegurar tanto un mejoramiento en el estándar de vida de las masas populares como en su incapacidad para dignificar la calidad de la vida del proletariado.<sup>42</sup> Algunas pocas indicaciones serán suficientes para comprender los alcances de esta frustración. Un estudio realizado por H. Varela y complementado con estimaciones más recientes efectuadas por el Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola señaló que los estratos socio-ocupacionales obreros (dentro de los cuales fueron incluidos los artesanos y los trabajadores por cuenta propia) disminuyeron su participación en el ingreso nacional de 33.7% en 1940 a 26.5% en 1960, al paso que las clases capitalistas subieron del 45.9% al 47.0% en igual periodo.<sup>43</sup> Por otra parte, el mismo autor observa que la relación entre el ingreso per cápita de los propietarios y el de los obreros, que era de 11 a 1 en 1940, había crecido hasta 14 a 1 en 1957, mientras que la relación entre los ingresos per cápita de los estratos medios y obreros pasó de 4 a 1 a 5 a 1 entre esos mismos años.<sup>44</sup> Puesto en términos bien simples esto significa que el hiato se ensanchó y que la desigualdad en el reparto de los ingresos se incrementó en lugar de reducirse con el desarrollo industrial. Si observáramos el panorama económico más reciente veríamos que las tendencias regresivas en la distribución de la renta persistieron, no obstante los esfuerzos hechos por algunos propagandistas para demostrar lo contrario. Las cifras relativas a la distribución funcional del ingreso muestran

<sup>42</sup> Para una fecunda discusión sobre el significado sociológico de las "medidas" empleadas para evaluar el nivel de vida de los sectores obreros, véase E. P. Thompson, *The making of the English working class*, Nueva York, 1963. Muchos de los artefactos estadísticos para demostrar el "progreso" de las clases obreras ocultan situaciones que configuran una verdadera degradación humana. Claro está que, como bien anota Thompson, las cuestiones relativas a la "calidad de la vida" son poco aptas para ser calibradas por el arsenal estadístico convencional; se requiere, por el contrario, una "evidencia literaria" que nos permita entender el sentido real de las fluctuaciones en los índices del *standard* de vida (pp. 210-212).

<sup>43</sup> Helio Varela, "Distribución del ingreso nacional en Chile a través de las diversas clases sociales" en *Panorama Económico*, N° 199, febrero 1959, p. 65. Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola, *Tenencia de la tierra y desarrollo socio-económico en el sector agrícola*, Santiago, 1966, p. 30.

<sup>44</sup> H. Varela, *op. cit.*, p. 66.

que el pago a los trabajadores manuales asalariados bajó del 26.7% en 1940 al 22.7% en 1950, al 18.4% en 1960, al 17.5% en 1965 y al 16.2% en 1970.<sup>45</sup> A su vez las crecientes exacciones impositivas recayeron especialmente sobre los sectores de más bajos ingresos: los impuestos indirectos, que constituían el 53.7% de las recaudaciones tributarias en 1940, subieron al 54.1% en 1950, al 64.0% en 1960, al 65.1% en 1965 y culminaron con un 70.9% en 1970.<sup>46</sup> Por último, una rápida mirada al desempeño del conjunto de la economía bastaría para demostrar la parquedad y lentitud del crecimiento: el gasto geográfico bruto por persona evolucionó de la siguiente manera: se acrecentó a una tasa anual de 1.8% entre 1940 y 1944, luego el ritmo del crecimiento declinó a un 0.7% en el quinquenio siguiente, subió a 3.5% en 1950-1954, registró un decrecimiento del orden del 1.6% entre 1955 y 1959, se recupera y llega a una tasa anual del orden del 2.3% en 1960-1964 para finalizar con un 1.6% entre 1965 y 1969.<sup>47</sup>

Estos magros resultados del desarrollo económico chileno y su incapacidad para promover el bienestar de la gran mayoría de la población deben ser considerados como una de las determinaciones fundamentales de la movilización popular. Obviamente, ello no significa que la última sea una derivación automática de aquél; creemos más bien que *lo que se encuentra en el sustrato mismo de la movilización del proletariado y de la crisis hegemónica de las clases dominantes es la relación dialéctica entre el fracaso del desarrollo económico para satisfacer las necesidades y esperanzas de las clases subalternas y la propia existencia y tarea práctica desarrollada por las organizaciones políticas de izquierda*. En muchos países de la periferia la industrialización acentuó las desigualdades existentes y aumentó la explotación de los sectores populares, pero en contadísimos casos eso se tradujo en una movilización política de las clases subordinadas, tal como ha ocurrido en Chile. Claro que en este país, a diferencia de muchos otros, los partidos obreros y el movimiento sindical habían recorrido una larga tra-

<sup>45</sup> H. Varela, *op. cit.*, p. 65. Los datos del año 1960, 1965 y 1970 fueron tomados de Odeplán, *Plan Anual 1971*, Santiago, 1971, p. 5. Téngase presente que estas cifras referidas a la distribución funcional del ingreso se refieren *exclusivamente* a los trabajadores *manuales asalariados*, excluyendo por lo tanto a los trabajadores por cuenta propia y a los artesanos. Por eso es que no coinciden exactamente con los datos presentados más arriba.

<sup>46</sup> Instituto de Economía, *La Economía de Chile en el periodo 1950-1963*, Santiago, 1963, t. II, p. 156. Dirección del Presupuesto, *Exposición sobre la política económica del gobierno y el estado de la hacienda pública*, Santiago, noviembre 1972. Tabla 1a.

<sup>47</sup> Aranda y Martínez, *op. cit.*, p. 56 y 57. Para complementar los datos del quinquenio 1965-69 se utilizó el informe de Odeplán, *Plan Anual 1971*, p. 4.

yectoria histórica antes de que se produjera la fuerte expansión de la industria manufacturera de los años treinta. Los partidos de izquierda, el Socialista y el Comunista, gozaban ya por entonces de un apoyo real entre las clases populares. El Socialista representaba principalmente una coalición muy amplia, multiclasista, de ciertos sectores de las capas medias, una “pequeña burguesía intelectual”, intelectuales y sectores obreros. El Comunista tenía un carácter de clase más nítido, con claro predominio proletario reclutado principalmente entre los mineros y los obreros industriales. El movimiento sindical, por otra parte, era de antigua data y probada militancia, importante por la conciencia que había adquirido de su misión histórica y por su fuerte arraigo en los núcleos obreros del salitre y del carbón, de los ferrocarriles, los puertos y los talleres de la naciente industria nacional de las primeras décadas del siglo xx. Vanguardia de las luchas obreras y heredero de la pasión de Luis Emilio Recabarren, el movimiento obrero chileno fue capaz de crear una tradición política que el correr de los años y su ineludible defensa de los intereses del proletariado convirtieron en el más preciado patrimonio de las clases populares. De esta manera una ideología, una mentalidad y una organización que antaño habían sido el sello distintivo de un reducido núcleo de militantes obreros en los albores de siglo se transformó en la expresión “natural” del proletariado en su conjunto.

Ahora bien, *esta tradición política pudo echar raíces profundas en el seno del proletariado debido a la continuidad histórica de la clase obrera.* En efecto, en Chile la iniciación del periodo de industrialización sustitutiva de importaciones no produjo una ruptura entre una “vieja” y una “nueva” clase obrera. Lo que aconteció fue que, a diferencia de lo ocurrido en Argentina por ejemplo, las transformaciones económicas desencadenadas por la crisis de la economía agroexportadora se realizaron sin que tuvieran lugar cambios estructurales en el carácter y la composición de los sectores obreros.<sup>48</sup> Los principales determinantes de la continuidad histórica del proletariado chileno parecen haber sido los siguientes: *a)* el modo de inserción de la economía en el mercado internacional; *b)* el origen y la composición de los núcleos proletarios más antiguos; *c)* la rigidez relativa de la estructura de clases. Pasemos ahora a examinar estos elementos con

<sup>48</sup> Véase el estudio de Adolfo Gurrieri, *Consideraciones sobre los sindicatos chilenos*, Santiago (mimeo), ILPES, 1968, para una muy atinada discusión sobre este tema. Consúltese también Leonardo Castillo, “Capitalismo e industrialización: su incidencia sobre los grupos obreros en Chile”, *Cuadernos de la Realidad Nacional*, Nº 8, junio de 1971, pp. 5-23. Una presentación más general puede apreciarse en Enzo Faletto, “Incorporación de los sectores obreros al proceso de desarrollo”, *Revista Mexicana de Sociología*, julio-septiembre de 1966.

mayor detención, resaltando los contrastes existentes con el caso argentino.

a) El enclave minero fue el modo como la economía chilena se integró en el mercado internacional. Su funcionamiento requería contar necesariamente con una numerosa clase obrera encargada de las tareas de extracción y procesamiento del mineral, concentrada geográficamente en las regiones del Norte Grande y sometida a durísimas condiciones de vida y trabajo. Al mismo tiempo, el enclave salitrero aglomeraba a su alrededor otro tipo de proletariado: aquel incorporado a las grandes obras públicas de infraestructura y a los servicios exigidos para el funcionamiento de un expansivo comercio internacional. Para facilitar el rápido y eficiente embarque de los nitratos hacia sus mercados de ultramar hacían falta ferrocarriles y puentes, caminos y puertos, y más de veinte mil obreros, concentrados en las proximidades de los yacimientos mineros, se hallaban ocupados en esas tareas a fines del pasado siglo.<sup>49</sup>

En resumen, el propio funcionamiento del enclave exportador implicó la rápida formación de un proletariado directa e inmediatamente vinculado como fuerza de trabajo permanente, a la producción salitrera. Como se verá más adelante, el hecho de que el enclave minero haya requerido la presencia de un proletariado habría de tener múltiples consecuencias en el desarrollo histórico ulterior de Chile. Por un lado, al estar situados en el mismo polo dinámico de la economía los mineros del salitre tenían una cierta capacidad potencial de negociación tanto en relación a la burguesía minera como al Estado. Una huelga salitrera no sólo recortaba las ganancias de las empresas sino que también diezmaba los ingresos fiscales y el financiamiento del aparato estatal, con los consiguientes perjuicios para las clases y grupos sociales que a la sazón se hallaban incorporados al mismo. Pero todo esto nos lleva a una segunda observación que ilustra vivamente el carácter contradictorio de esa mayor capacidad de presión que tenían los obreros del salitre: en razón de su potencialidad para lesionar seriamente el funcionamiento del conjunto de la economía, el Estado y las clases dominantes mantuvieron bajo severo escrutinio el desarrollo de la "cuestión social" en las regiones salitreras. Esto se tradujo en una activa injerencia del Estado en las fases previas al estallido de las huelgas y en una despiadada represión cuando los obreros rehusaban aceptar las estipulaciones patronales; en la práctica concreta, los mineros tuvieron pocas posibilidades de beneficiarse por su localización estratégica en el proceso productivo en oposición a las muchas ocasiones en que sufrieron el rigor

<sup>49</sup> Julio César Jobet, *Ensayo crítico del desarrollo económico-social de Chile*, Santiago, 1955, p. 100.

represivo de los poderes públicos.<sup>50</sup> Probablemente sea más atinado señalar que la existencia de un proletariado minero íntimamente asociado al nervio propulsor del crecimiento económico otorgó ciertas posibilidades de negociación a los sectores medios y algunas fracciones de la burguesía, quienes, como en los años de la primera posguerra, fueron capaces de incorporar al proletariado minero como “masa de maniobra” de una amplia coalición policlasista encaminada a destronar la dominación oligárquica. Naturalmente esto suponía al menos una cierta aptitud, de parte de los sectores obreros, para expresar su propio descontento a través de sus organizaciones autónomas. En resumen, la existencia del enclave minero no sólo promovió la formación de un proletariado sino que, dada la naturaleza de la dominación oligárquica, permitió también la temprana inserción de los núcleos obreros dentro del juego de alianzas que forjaban las fuerzas sociales predominantes en el Estado.<sup>51</sup>

b) El origen de estos primeros sectores obreros tiene mucha relevancia para comprender la continuidad histórica del proletariado chileno: en su inmensa mayoría esos trabajadores eran migrantes internos procedentes de los grandes latifundios del Valle Central, atraídos por los comparativamente altos salarios pagados por las oficinas salitreras. Desde el momento mismo de su puesta en marcha la demanda de fuerza de trabajo generada por las actividades mineras exedió con creces la oferta disponible en las regiones adyacentes al mineral. Las provincias de Tarapacá y Antofagasta habían sido recientemente incorporadas al territorio nacional luego de la cruenta Guerra del Pacífico y se trataba de regiones desérticas y muy escasamente pobladas. Situadas en el extremo Norte del país, alejadas del núcleo poblacional más importante de Chile —el Valle Central— su riqueza consistía en albergar en sus dilatadas e inhóspitas extensiones enormes depósitos de salitre. La iniciación de las actividades mineras puso también en movimiento un intenso proceso migratorio por el cual grandes contingentes de población se desplazaron desde las zonas agrícolas del centro en dirección al norte, en donde la escasez de mano de obra obligaba

<sup>50</sup> Para más detalles, véase Gurrieri, *op. cit.*, pp. 6-7.

<sup>51</sup> Nos parece conveniente agregar aquí que Luis Emilio Recabarren fue elegido diputado nacional por la circunscripción electoral de Tocopilla, Antofagasta y Taltal en 1906, contando para ello con el apoyo abrumador de los obreros del salitre y de las industrias ligadas a la explotación del mineral. Privado de su derecho a ocupar la banca que había ganado en buena ley (por su negativa a expresar el juramento tradicional de los diputados entrantes a la Cámara) se llamó a una elección complementaria, que fue otra vez ganada por el propio Recabarren. Véanse más detalles en Jobet, *op. cit.*, pp. 141-43 y Hernán Ramírez Necochea, *Origen y Formación del Partido Comunista de Chile*, Santiago, 1965, p. 47.

a la burguesía minera a ofrecer salarios hasta tres o cuatro veces superiores a aquellos que el trabajador agrícola podía percibir en el Valle Central.<sup>52</sup>

Tan importante como el hecho de la migración originaria hacia la región del salitre fue el mantenimiento de un activo movimiento migratorio en las décadas siguientes. La ininterrumpida circulación de contingentes que regresaban al Valle Central y otros que se marchaban rumbo al norte fue producido por la inestabilidad y las fluctuaciones de corto plazo del ciclo salitrero, fundamentalmente determinadas por la cotización del mineral en los mercados internacionales y las maniobras especulativas de las compañías que controlaban su producción. El resultado de tales oscilaciones se reflejaba en los bruscos cambios en el nivel de ocupación de la fuerza de trabajo afectada al salitre, los que tendieron a acentuarse en los años agónicos del modelo exportador, provocando agudas caídas seguidas de no menos abruptas alzas en la ocupación obrera. En 1918, por ejemplo, 56 981 obreros trabajaban en los yacimientos salitreros; al año siguiente esa cifra se redujo a 44 498 y en 1922 no había más que 25 462. Sin embargo, en 1923 su número vuelve a pasar los cuarenta mil y en 1925 las salitreras ocuparon a 60 785 trabajadores, lo que constituye la cifra más elevada de su historia. Esta coyuntura de alta ocupación se mantuvo con sus típicos altibajos hasta 1930 cuando la Gran Depresión golpeó rudamente las explotaciones del nitrato y la ocupación minera se derrumbó: en 1931 sólo 16 563 obreros quedaban en los yacimientos y al año siguiente esa cifra se había reducido a nada más que 8 711.<sup>53</sup>

Ahora bien, la persistente inestabilidad de la ocupación en el salitre estimuló un incesante flujo migratorio cuyas consecuencias es conveniente destacar. En primer lugar creó un mercado de trabajo a través del cual un segmento importante de las clases populares chilenas fue sometido a una explotación capitalista que era diferente, más aguda y más visible de la que había conocido en los fundos del Valle Central. Segundo, la experiencia de trabajo en los yacimientos del salitre favoreció el desarrollo de la conciencia política de los trabajadores, creó una solidaridad y una cultura de clase y precipitó la formación de sus organizaciones políticas y sindicales. No es por azar que los distritos mineros son escenarios de grandes huelgas y movimientos populares desde fines del siglo XIX —entre los que sobresalen la huelga y la masacre de Iquique en 1907— ni que sea justamente allí donde Recabarren es elegido diputado en 1906 y funde seis años más tarde el Partido Obrero Socialista, precursor del Partido Comunista de

<sup>52</sup> Jobet, *op. cit.*, pp. 133-134.

<sup>53</sup> Ver Carlos Hurtado Ruiz-Tagle, *Concentración de población y desarrollo económico-El caso chileno*, Santiago, 1966, p. 174.

Chile. Tercero, estos núcleos obreros vinculados al salitre, en razón de su misma inestabilidad ocupacional y los persistentes movimientos migratorios que ella originaba, tuvieron la oportunidad de diseminar en otras regiones y ramas de actividad económica la experiencia obrera de los minerales nortinos, difundiendo esa tradición político-ideológica y organizativa en diversos sectores del proletariado. Vale la pena acotar que este proceso de difusión no quedó circunscrito a las profesiones y oficios vinculados a la economía urbano-industrial sino que también abarcó —aunque con menor eficacia— a ciertos núcleos del campesinado que, por distintas razones, se hallaban involucrados en la compleja trama de relaciones que ligaba la sociedad agraria —como proveedora de fuerza de trabajo y alimentos— con la economía del salitre.<sup>54</sup>

c) Entremos ahora al examen de lo que hemos considerado como otro de los principales determinantes de la continuidad histórica del proletariado chileno: la rigidez relativa de la estructura de clases. Si bien el crecimiento económico promovido por el auge salitrero tuvo por efecto una discreta expansión de las capas medias, sus implicaciones fueron mucho más modestas en lo que atañe a las clases populares. El dinamismo del modelo exportador suponía una marcada ampliación de las funciones técnico-administrativas del Estado —amén de un reajuste de sus funciones políticas de dominación. Con la expansión del enclave salitrero el Estado pasó a ocupar una posición estratégica en el conjunto de la economía: otorgaba concesiones para la explotación del salitre; consolidaba el monopolio de las grandes empresas; concentraba en sus manos un importante volumen de crédito interno; generaba con sus obras públicas una cuantiosa demanda de bienes susceptibles de ser producidos por la industria nacional y, por último, su funcionamiento era financiado casi por completo a través de los impuestos que gravaban la exportación del salitre, con lo cual las distintas fracciones de las clases dominantes se eximían de contribuir al mantenimiento del aparato estatal. Este nuevo papel del Estado llevaba implícito el crecimiento de una burocracia que debía hacerse

<sup>54</sup> Ver Gurrieri, *op. cit.*, p. 43. Para hacer una comparación con el caso argentino véase, entre otros: Gino Germani, *Política y sociedad en una época de transición*, Buenos Aires, 1962. Oscar Cornblit, *Inmigrantes y empresarios en la política argentina*, Buenos Aires, Documento de Trabajo N° 20, Centro de Investigaciones Sociales, Instituto di Telia. Roberto Cortés Conde y Ezequiel Gallo, *La formación de la Argentina moderna*, Buenos Aires, 1967. Miguel Murnis y Juan Carlos Portantiero, *Estudios sobre los orígenes del peronismo*, Buenos Aires, 1971 y Gino Germani, *Sociología de la modernización*, Buenos Aires, 1971 y, del mismo autor, *La movilidad social en la Argentina*, apéndice a R. Bendix y S. Lipset (ed.), *La movilidad social en la sociedad industrial*, Buenos Aires, 1964.

cargo de las tareas necesarias para garantizar el “correcto” funcionamiento de la economía dependiente: esos cuadros administrativos de reciente creación se convirtieron en uno de los más efectivos canales a través de los cuales se verificó la expansión de las capas medias. La bonanza económica y el crecimiento urbano, por otra parte, apuraron el desenvolvimiento de un complejo sistema comercial que, organizado en torno al salitre, vinculaba las actividades mineras con la producción agrícola, la industria, el comercio y la banca. La existencia de este sistema, esencial para una economía subordinada a un centro hegemónico externo, contribuyó también a abrir no pocas oportunidades de empleo para los sectores medios.<sup>55</sup>

El grueso de las clases populares, sin embargo, no llegó a incorporarse a la creciente prosperidad nacional. Aun cuando es razonable admitir que algunos de sus elementos, especialmente dentro de las principales ciudades, tuvieron acceso a ciertas ocupaciones de tipo artesanal o lograron instalar un pequeño taller por cuenta propia, la enorme mayoría del proletariado quedó al margen del modesto flujo de movilidad social ascendente. Unas breves referencias servirán para ilustrar esta afirmación. En 1895, en plena fase ascendente del ciclo del salitre, el 87.5% de la población económicamente activa se desempeñaba en ocupaciones “manuales”; en 1940, agotadas ya las posibilidades de crecimiento “hacia afuera” y en los años iniciales de la gran expansión manufacturera, el 84.3% de la población activa seguía ejerciendo dichas ocupaciones.<sup>56</sup> Sin pretender elaborar conclusiones demasiado terminantes a partir de estos datos merece destacarse el hecho de que a lo largo de casi medio siglo el perfil de la estructura de clases se mantuvo prácticamente inmutable. Naturalmente esto no quiere decir que otros cambios no hayan tenido lugar en el interior de tal estructura, sino que, si los hubo, ellos se produjeron independientemente de un proceso significativo de “movilidad estructural”.<sup>57</sup> En otras palabras, el di-

<sup>55</sup> Véase el trabajo de E. Faletto y E. Ruiz en Faletto, Ruiz y Zemelman, *Génesis histórica*, op. cit., pp. 15-28.

<sup>56</sup> Cifras calculadas sobre la base de los datos publicados por los censos de 1895 y 1940 respectivamente.

<sup>57</sup> Un marco teórico para el análisis de los procesos de movilidad social fue elaborado por G. Germani. Ver su *Sociología de la modernización*, pp. 85-123. La noción de “movilidad estructural” se refiere a los cambios en la proporción de la población activa adscrita a ciertas categorías o posiciones ocupacionales. Una manera de establecer la magnitud de la “movilidad estructural” es justamente a través de la comparación de la proporción de personas en ocupaciones manuales en diferentes momentos del tiempo. Por contraposición a ésta, la “movilidad por reemplazo” es aquella originada por el intercambio o la circulación de personas entre distintas posiciones ocupacionales. Para una aplicación al estudio de la movilidad social en la Argentina, ver Gino Germani, *La movilidad social en la Argentina*. Para una eva-

namismo de la economía en esas décadas fue insuficiente para asegurar la creación sostenida de nuevas oportunidades de empleo el nivel de las capas medias; es decir, en una magnitud tal que excediera con creces la oferta originada por el crecimiento demográfico de los sectores medios tradicionales e hiciera necesario reclutar buena parte del nuevo personal entre las clases populares. Por el contrario, hay ciertos indicios que sugieren que el así llamado “surgimiento” de los sectores medios fue más que nada una transformación operada a partir de las viejas capas intermedias preexistentes que la formación de un nuevo estrato social constituido con el aporte predominante de núcleos populares en ascenso. Un rasgo distintivo de estos sectores medios parece haber sido su carácter superestructural, su carencia de una incrustación firme en el proceso productivo en calidad de pequeños o medianos industriales y comerciantes, por ejemplo. Se trataba fundamentalmente de una “pequeña burguesía intelectual” que habiendo tenido acceso a la educación secundaria —y en algunos casos hasta a las propias aulas universitarias— encontró en la expansión salitrera una demanda creciente por sus profesiones administrativas y burocráticas.<sup>58</sup>

Se puede por lo tanto anticipar dos conclusiones de carácter general sobre la cuestión de la estructura de clases: primero, que su perfil (es decir, la relación entre la población activa ocupada en actividades “manuales” y “no-manuales”) permaneció prácticamente inalterado entre 1895 y 1940, a pesar de que hay antecedentes como para suponer que a partir de la Guerra del Pacífico y la incorporación del salitre ya se había operado un cierto incremento en el tamaño de las capas medias. Esta tendencia, no obstante, apaciguó su ritmo una vez que se produjo la consolidación y el predominio del enclave. Segundo, el origen de esas capas medias hay que buscarlo en los propios sectores pequeñoburgueses tradicionales, especialmente de tipo intelectual, y no en un proceso de movilidad social ascendente de algunos núcleos obreros. De ahí que no sea aventurado sostener que tanto la “movilidad estructural” como la “movilidad de reemplazo” fueron sumamente restringidas y que las transformaciones acaecidas en las clases populares —formación de un proletariado industrial en las grandes ciudades, desaparición progresiva del artesanado, migración rural-urbana, decadencia de ciertos estratos del campesinado— se circunscribieron a reajustes y reacomodaciones en el interior de las mismas clases populares y a ciertos proce-

luación del alcance de los procesos de movilidad social en América Latina, ver F. H. Cardoso y J. L. Reyna, “Industrialización, estructura ocupacional y estratificación social en América Latina”, en F. H. Cardoso, *Cuestiones de sociología del desarrollo de América Latina*, Santiago 1968, pp. 79-105.

<sup>58</sup> Ver A. Edwards, *op. cit.*, pp. 186-190; Faletto y Ruiz, *op. cit.*, pp. 26-28. Aníbal Pinto, *Chile, un caso de desarrollo frustrado*, Santiago, 1958, pp. 131-135.

sos de movilidad “intraclase”, que sólo por excepción dieron lugar a ascensos sociales de mayor amplitud.

Ahora bien, ¿qué consecuencias se desprenden de estas observaciones? Digamos para comenzar que la rigidez de la estructura de clases en la formación social chilena y sus bajas tasas de movilidad social hicieron que varias generaciones de obreros vivieran en una situación de clase homogénea y relativamente “aislada” (en términos sociales e inclusive ecológicos en ciertos casos) y que por lo tanto crecieran y se socializaran dentro de una “tradicción proletaria” en la cual el socialismo marxista era la ideología que le otorgaba una identidad muy definida a la condición obrera y un instrumento para la orientación de las luchas populares.

La tradicional inestabilidad del empleo en el salitre había mantenido un continuo contacto migratorio entre las provincias nortinas y las del Valle Central. La casi completa paralización que sobrevino en las actividades salitreras luego de la Gran Depresión lanzó al mercado laboral un significativo número de obreros que reinvertieron la dirección del proceso migratorio. Buena parte de este contingente fue absorbido por el pujante crecimiento industrial propulsado por la readaptación de las fuerzas productivas a las nuevas condiciones creadas por la estructura capitalista internacional. De este modo la experiencia de lucha de los sectores más combativos, organizados y “conscientes” del proletariado chileno —los mineros— se transmitió y se encarnó en el momento mismo de constitución de la moderna clase obrera industrial. Claro está que en su formación intervinieron también otros grupos y fracciones de las clases populares: artesanos, trabajadores por cuenta propia, núcleos obreros tradicionales, etc. Pero fueron precisamente las fracciones de más antigua formación quienes establecieron el carácter militante e ideológico del movimiento obrero y quienes se pusieron a su vanguardia. A diferencia de lo ocurrido en la Argentina, el impacto de la crisis de 1930 y la reorientación de las fuerzas productivas no alcanzaron a producir una ruptura en la continuidad histórica de las clases populares chilenas. Esto es particularmente claro cuando se observa la trayectoria del movimiento sindical como órgano de expresión de los intereses del proletariado. Por otra parte, no habría que olvidar que ciertos procesos que actuaron en la escena política contribuyeron a robustecer la tradición socialista de la clase obrera. Los partidos de izquierda —en sus luchas y campañas electorales, en su gestión parlamentaria, con su prensa y propaganda, etc.— coadyuvaron a ampliar la resonancia del socialismo marxista más allá de las fronteras en las cuales el movimiento obrero podía hacer sentir su influencia. Facilitaron con su labor una mayor proyección sobre otros estratos del proletariado y las capas medias y atrajeron a una

parte de la *intelligentzia* a la causa de socialismo. La acción de los partidos marxistas, aun dentro de los límites de la democracia burguesa, posibilitó la difusión del pensamiento de izquierda y creó las condiciones propicias para la organización del proletariado. Al mismo tiempo debiéramos subrayar que apoyar el ascenso político de los sectores medios en 1938 y compartir, aunque no sea más que en escala reducida el control del aparato estatal, los partidos de izquierda legitimaron las tareas organizativas de los núcleos obreristas y garantizaron un cierto margen de libertades públicas que hicieron posible el desarrollo del movimiento popular.

## V. LA CRISIS ORGÁNICA

En este trabajo hemos tratado de presentar algunas reflexiones en torno a los determinantes estructurales de la coyuntura política de fines de la década del sesenta en Chile. En base a ellas sostenemos entonces que tanto el triunfo de Allende como su posterior gestión gubernativa nada tienen que ver con los “accidentes” o las “sorpresas” históricas señalados por algunos autores; tampoco guardan relación con esa feliz combinación de factores “fortuitos” apuntados por otros estudiosos de la materia. En realidad, la victoria de la izquierda en 1970 tuvo raíces mucho más profundas y es allí donde deben buscarse las razones por las cuales un ajustadísimo triunfo electoral dio lugar a la inauguración de un gobierno que avanzó resueltamente —a pesar de innumerables obstáculos— en dirección del socialismo.<sup>59</sup>

<sup>59</sup> Es bien sabido que un amplio sector de la “*intelligentzia revolucionaria*” impugnó abiertamente y sin calificaciones el proceso político abierto con la presidencia de Allende. Esto tampoco constituye una novedad: Lenin y Mao se refirieron extensamente a estas desviaciones “dogmáticas” y pequeño-burguesas que surgen y vegetan en todo proceso de transformación social y, naturalmente, éstas no podían estar ausentes de Chile. Dada la importancia que, lamentablemente, las deformaciones “dogmáticas” tienen en el pensamiento político de la izquierda latinoamericana, hemos creído oportuno citar un par de comentarios que —sobre este particular— realizara Fidel Castro durante su visita a Chile a fines de 1971. Interrogado por los estudiantes de la Universidad de Concepción acerca de la gestión de gobierno de la Unidad Popular, Castro dijo lo siguiente: “Ahora bien, si a mí me dicen qué es lo que ha estado ocurriendo en Chile y, sinceramente, les diría que *en Chile está ocurriendo un proceso revolucionario*. Y nosotros, incluso, a nuestra revolución la hemos llamado un proceso, un proceso no es todavía una revolución, un proceso es un camino, un proceso es una fase que se inicia y si en la pureza del concepto lo debemos caracterizar de alguna forma, hay que caracterizarlo como una fase revolucionaria que se inicia. Hay que *tener en cuenta las condiciones en que se desenvuelve* este proceso, con qué medios, con qué recursos, con qué fuerzas, qué correlación de fuerzas.” En su discurso de despedida, el 2 de diciembre de 1971, Castro se refirió una

Explorando la totalidad dentro de la cual se constituyó la coyuntura que estamos analizando, parece claro que la misma presentaba las características que Gramsci asignaba a las "crisis orgánicas" y que, en última instancia, se resumían en una ruptura en la relación entre representantes y representados, entre el Estado y la sociedad civil. Desde el punto de vista de las clases subalternas esto significaba que las mismas habían experimentado un proceso de movilización política a partir del cual estaban negando su subordinación a las clases dirigentes. Esto lo hemos visto con cierto detenimiento en las páginas anteriores y no abundaremos ahora en nuevas explicaciones. Desde el ángulo de las clases dominantes, la crisis orgánica trasuntaba la profundización de la brecha que se había producido en su interior. Doble fractura, por lo tanto, en la relación sociedad civil-Estado: a nivel de las clases populares, por su creciente movilización política que agravaba la incapacidad del Estado para "representarlas" en conformidad con las nuevas demandas que ellas planteaban. A nivel de las clases dominantes, por la desintegración de la alianza establecida entre sus varias fracciones y por los antagonismos existentes entre algunas de ellas y sus representantes políticos: el Estado era impotente para garantizar al mismo tiempo la supremacía del conjunto de las clases dominantes sin sacrificar —hasta cierto punto— los intereses de las fracciones no-hegemónicas. En esta situación de crisis orgánica, marcada por una "correlación de fuerzas" favorable a los partidos populares, tiene lugar la victoria electoral de la Unidad Popular y su corta experiencia de gobierno. No hay espacio, por lo tanto, para especulaciones sobre los elementos accidentales o fortuitos que intervinieron en su gestación: una situación de crisis orgánica no se constituye sino a partir de rupturas estructurales entre Estado y sociedad y es allí donde se debe investigar si es que queremos comprender cómo y por qué fue posible un gobierno popular en Chile.

A lo largo de estas páginas hemos abordado el problema de la crisis orgánica desde la perspectiva de la movilización de las clases populares. El análisis de la desintegración del bloque dominante lo hemos reservado para otra oportunidad; sin embargo, en el momento de la recapitulación final procede que señalemos algunos de los elementos que nos servirán para

vez más al mismo tema: "Nos preguntaron en algunas ocasiones, de un modo académico, si considerábamos que aquí tenía lugar un proceso revolucionario. Y nosotros dijimos sin ninguna vacilación: Sí. Pero cuando se inicia un proceso revolucionario, o cuando llega el momento en un país en que se produce lo que podemos llamar una crisis revolucionaria, entonces las luchas y las pugnas se agudizan tremendamente. Las leyes de la historia cobran su plena vigencia." Ver *Fidel en Chile*, Santiago, 1972, pp. 89 y 262 (subrayado nuestro).

explicar por qué las distintas fracciones dominantes se manifestaron incapaces para salvaguardar su unidad política.

Esquemmatizando a sus líneas esenciales un argumento más complejo digamos que “la cuestión agraria” fue uno de los factores de más potencialidad disgregadora dentro del bloque dominante. Si en los tiempos del Frente Popular, a fines de la década del treinta, las distintas fracciones de la burguesía llegaron a un “arreglo de caballeros” con las clases terratenientes, las estrecheces económicas de los años sesenta irían a deteriorar agudamente el compromiso original. El Frente Popular representaba a una amplia coalición de la burguesía, las capas medias y los sectores populares organizados: para ser gobierno —y afianzar políticamente el ascenso de las nuevas fracciones de la burguesía y algunos sectores medios— requería de los votos que aportaban los obreros y empleados a través de los partidos Socialista, Comunista y Radical. Esto significaba un reconocimiento explícito de las organizaciones sindicales del proletariado industrial y minero, una legislación social que estableciera ciertos pequeños privilegios para los empleados (que no sólo mejorara objetivamente su situación como asalariado sino que también “elevara” su posición como trabajador de “cuello blanco”) y reparara algunas de las más irritantes “injusticias” producidas por el desordenado crecimiento de las fuerzas económicas. Aparte de ello, se necesitaba garantizar un nivel de salario razonable y un costo de vida barato. Dada la capacidad combativa del proletariado y su relativa efectividad para cancelar los aumentos de los precios con incrementos salariales, la preocupación de los sectores hegemónicos del Frente Popular se orientó hacia la agricultura, en donde procuró establecer una política de precios apropiada para contener el costo de vida dentro de límites aceptables para sus aliados urbanos populares. Esto implicó que los precios de los productos agropecuarios sufrieron si no una baja relativa por lo menos una pegajosa vigilancia por parte del Estado “intervencionista”, lo que obviamente distaba mucho de configurar una situación favorable para la oligarquía terrateniente.<sup>60</sup> Sin embargo, como el poder de los latifundistas —aunque un tanto deteriorado— seguía siendo considerable, su concurso era esencial para la estabilidad de la coalición gobernante. En otras palabras, ni los terratenientes ni las distintas fracciones de la burguesía tenían el poder suficiente como para gobernar prescindiendo de un compromiso con el otro; ninguno podía imponer su dominación sobre el resto sin transar parte de sus intereses. En vista de lo anterior y teniendo en cuenta las estrechas vinculaciones que una de las fracciones dominantes del radicalismo mantenía con los señores

<sup>60</sup> Véase Aranda y Martínez, *op. cit.*, pp. 129-34. Pinto, *Chile, un caso*, pp. 158-160.

de la tierra, no fue sorprendente contemplar cómo las clases gobernantes implementaban un conjunto de medidas de política económica y laboral tendientes a compensar y balancear las mayores restricciones impuestas a los negocios agropecuarios. Esta especie de "indemnización" a los sectores latifundistas asumió varias modalidades: subsidios de índole diversa (para importación de maquinarias, fletes, obras de infraestructura, etc.); mantenimiento de un anacrónico régimen de tributación agrícola gracias al cual la clase terrateniente se hallaba, en la práctica, casi exenta del pago de impuestos por cuanto las contribuciones anuales de los propietarios de fundos eran irrisorias; congelamiento o rebaja *de facto* en los salarios agrícolas y, paralelamente a lo último, acentuación de la represión ejercida en contra del movimiento sindical campesino.<sup>61</sup> El compromiso con la oligarquía permitió a la burguesía reducir las presiones reivindicativas de obreros y empleados originadas por el alza de los precios agrícolas y mantener su cuota de ganancia; a su vez, las clases terratenientes se resarcieron fácilmente de los perjuicios ocasionados por precios supuestamente desfavorables a través de mayores franquicias económicas y una redoblada explotación del campesinado.

Ahora bien, las transformaciones económicas derivadas de la industrialización limaron los fundamentos mismos de la conciliación entre los intereses industriales y agropecuarios: sus intereses entraron en conflicto cuando el retraso de la agricultura se convirtió en un obstáculo estructural al crecimiento de la economía. En efecto, el estancamiento agrario es uno de los principales determinantes de la inflación toda vez que el sector agrícola se ha mostrado incapaz de incrementar la oferta de alimentos para una creciente población urbana. De este modo, el abastecimiento insuficiente tuvo como consecuencia el encarecimiento de los precios y el costo de vida y la propagación de presiones inflacionarias al conjunto de la economía. Por otra parte, la insuficiencia de la producción agropecuaria trajo repercusiones cada vez más gravosas en la balanza de pagos, puesto que cada año se hacía necesario importar una cantidad mayor de alimentos para lo cual se debían afectar divisas que podrían haberse destinado a usos más productivos. Por último, el rezago en la evolución de la agricultura tenía incidencia directa en la industria por cuanto limitaba sustancialmente el mercado para los productos industriales. La estructura de la distribución del ingreso era tan concentrada que la enorme mayoría del campesinado estaba al margen

<sup>61</sup> Aranda y Martínez, *ibid.*, pp. 132-134. Pinto, *ibid.*, pp. 162-163. Hugo Zemelman, "El movimiento popular chileno y el sistema de alianzas en la década de 1930", en Faletto, Ruiz y Zemelman, *op. cit.*, pp. 112-114.

del mercado de la industria textil y del calzado, para no hablar sino de lo más elemental.<sup>62</sup>

Dos elementos adicionales sirvieron para reforzar la necesidad —sentida por los sectores más dinámicos de la economía— de “modernizar” la producción agraria: el deterioro de la cohesión de la sociedad rural y los nuevos requerimientos planteados por la fase de “internacionalización del mercado interno”. En relación al primero, el argumento que se desea desarrollar es el siguiente: los sectores terratenientes contaron con una capacidad de representación política en el interior del Estado que era muy superior a lo que la relativa precariedad de su base material habría autorizado a pensar. Esta “sobrerrepresentación” de los intereses agrarios tenía varios orígenes: en primer lugar, porque cuando se produce la crisis de la dominación oligárquica —en los años posteriores a la primera Guerra Mundial— la resolución de la misma no implicó la exclusión de la clase terrateniente del “bloque en el poder”. Lo que sí ocurrió fue que los intereses del capital territorial perdieron su capacidad hegemónica a manos de la burguesía aliada con los sectores medios. Pero este desplazamiento de los sectores agrarios, reacomodación en el interior del “bloque en el poder”, no alteró los fundamentos materiales de su dominación de clase: la propiedad de la tierra. Sólo se limitó a recortar su predominio político tradicional. Y aquí llegamos al segundo factor que ayuda a comprender el por qué de la sobrerrepresentación de los intereses de la agricultura en el Estado: es que a su carácter de propiedad del suelo la oligarquía añadía su condición de clase “dirigente” en la vasta estructura de dominación de la sociedad rural. Esto suponía el manejo de un sistema de relaciones sociales tradicionales que garantizaba a los señores de la tierra la obediencia de la población campesina, la que podía ser utilizada en las elecciones para dotar de un apoyo abrumador a los partidos representativos de los terratenientes. Mientras esta estructura de dominación social tradicional se mantuvo relativamente cohesionada y obedecía a las directivas de sus “dirigentes naturales”, las clases terratenientes gozaron de un indudable ascendente político. Sin embargo, cuando la industrialización, la migración a las ciudades y la apertura del campo a la red de relaciones sociales y comunicaciones procedentes de los centros urbanos comenzaron a carcomer la solidez de la estructura tradicional, la capacidad de representación política de aquéllas se contrajo súbitamente. Por un lado, porque el desarrollo del proceso de urbanización drenó considerablemente el volumen de la población rural sujeta al dominio de los grandes

<sup>62</sup> Aranda y Martínez, *ibid.*, pp. 56-57 y 116-151. Pinto, *Una economía difícil*, México, 1964, pp. 31-40 y 90-95. José Cademártori, *La economía chilena*, Santiago, 1968, pp. 110-116.

propietarios; en 1920 la población rural era el 57.2% del total, en 1940 era el 49.3% y en 1960 llegaba sólo al 35.9%. Además, la declinante población rural era crecientemente penetrada por las actividades desplegadas por grupos extraños a la sociedad rural tradicional —tal como sindicatos, partidos de izquierda, universitarios y grupos estudiantiles— cuyas acciones aceleraron la descomposición de la frágil cohesión de la sociedad agraria y precipitaron la movilización del campesinado.

La reorganización de los procesos productivos que tuvo lugar luego de agotada la etapa de “sustitución fácil” de importaciones no hizo acrecentar las dificultades de los terratenientes. Efectivamente, en las nuevas condiciones de “internacionalización del mercado interno” dentro de las cuales debían realizarse los esfuerzos para lograr el desarrollo económico, los sectores vinculados a la agricultura difícilmente podían preservar la inviolabilidad del arcaico régimen de tenencia de la tierra. En primer lugar, porque su capacidad de presión política se había disminuido paralelamente a la disolución de la estructura de dominación tradicional. Segundo, porque las clases y fracciones que tenían posibilidades de dar una respuesta “adecuada y congruente” a los nuevos requerimientos del desarrollo —las fracciones modernas y dinámicas del capitalismo nacional y el gran capital monopolista internacional— necesitaban para su propia expansión la “modernización” de la economía agraria. Y esto implicaba la puesta en marcha de un proceso de reforma que inevitablemente suscitaría la encarnizada oposición de los sectores terratenientes.<sup>63</sup>

La reorganización del proceso productivo se expresó políticamente a través del significativo realineamiento de fuerzas sociales verificado en el interior del Estado. Su resultado inmediato fue el encumbramiento de la Democracia Cristiana a la cabeza de una heterogénea coalición electoral: bajo una misma bandera se reunían los sectores más “progresistas” de la burguesía nacional —con estrechas vinculaciones al capital monopolista internacional— muchos intelectuales y profesionales, importantes segmentos de las capas medias y la pequeña burguesía, campesinos sin tierra, “masas marginales” y hasta algunos sectores minoritarios del proletariado industrial. A esta contradictoria e inestable superposición de intereses se sumó, a último momento y a regañadientes, el núcleo terrateniente tradicional que, alarmado ante las posibilidades nada lejanas de una clara victoria izquierdista en 1964, volcó todo el peso de su influencia en favor de la candidatura de Eduardo Frei.

<sup>63</sup> Véase la excelente elaboración que sobre el tema de las nuevas condiciones del desarrollo latinoamericano realizan Fernando H. Cardoso y Enzo Faletto en *Dependencia y Desarrollo en América Latina*, Santiago, ILPES, 1967, pp. 147-173.

Los antagonismos existentes en el seno de esta coalición, latentes mientras sus personeros se encontraban fuera de las palancas de mando de la economía, se hicieron presentes con pasmosa celeridad una vez que sus representantes pasaron a desempeñar las funciones de gobierno. La reforma agraria, aun cuando aplicada de modo parsimonioso, fue terca y violentamente resistida por los latifundistas en diversos frentes y con diversas armas: en los fundos y en las calles, en el terreno económico, en la lucha política y en la contienda ideológica. Rápidamente las fuerzas agrarias se fueron transformando en el polo aglutinante que organizó la actividad política de otros sectores y clases que también habían sido (objetiva o subjetivamente) “defraudados” por la gestión oficial: ciertos sectores de la pequeña burguesía y los núcleos “tradicionales” de la burguesía que quedaron marginados por el ascenso de las fracciones más “modernas” vinculadas al capital monopolista se plegaron a la cruzada restauradora emprendida por los señores de la tierra. Lo que ocurrió fue que ciertos cambios en la política económica —en los aspectos tributarios, crediticios y de fijación y control de precios para los artículos de primera necesidad— efectuados con vistas a racionalizar el funcionamiento de la estructura capitalista lesionaron los intereses de los segmentos más primitivos de las clases propietarias y los transformó en agrios críticos del régimen. En la escena política, la disgregación de la gran coalición procedió a pasos agigantados: hacia los finales del gobierno de Frei, el caudal electoral de la Democracia Cristiana se había reducido a la mitad, a pesar de que seis años antes sus líderes anunciaron pomposamente al mundo que habría treinta años de gobierno demócrata cristiano en Chile.<sup>64</sup>

De esta manera, al aproximarse la fecha de las elecciones presidenciales las posibilidades de reconstituir una coalición de la amplitud y cohesión necesarias como para detener el ascenso de los sectores populares eran prácticamente nulas: primero, por la magnitud y el carácter estructural de las contradicciones existentes entre los intereses de las fracciones de la burguesía ligadas al gran capital monopolista y los sectores más “tradicionales” y periféricos de la economía capitalista. Estos últimos sabían que mal podían ser representados por los personeros políticos de los primeros. La burguesía no ignoraba que su propia expansión requería resolver de alguna manera “la cuestión agraria” y que debía desplazar las formas atrasadas de producción capitalista en la industria y el comercio. Su necesidad no era sólo económica: para mantener el apoyo de las capas medias y de algunos sectores del proletariado (especialmente campesinos y “marginales”) debía impulsar ciertos proyectos redistribucionistas cuya viabilidad econó-

<sup>64</sup> Ver J. Garcés, *op. cit.*, pp. 46-49 y 59-63.

mica era bajísima si un amplio sector de la economía seguía funcionando a márgenes muy bajos de eficiencia y productividad. En segundo lugar, otro obstáculo que impedía la reconstitución de la unidad política de las clases dominantes era la movilización política de las clases populares, las que con su creciente radicalización ahondaron aún más los antagonismos existentes entre los representantes políticos de los sectores tradicionales por un lado y los personeros de la alicaída coalición capitalista modernizante. Esto se percibió muy claramente en el curso de la campaña debido a los repetidos y encendidos ataques de Radomiro Tomić a la oligarquía terrateniente y sus promesas en el sentido de completar el proceso de la reforma agraria.

En este contexto se llevaron a cabo las elecciones presidenciales de 1970. Allende triunfó pero por un margen muy estrecho de votos y sin obtener la mayoría absoluta; por lo tanto, era el Congreso Pleno quien debía elegir al nuevo presidente entre los dos candidatos que habían obtenido las dos primeras mayorías relativas. En el Parlamento los partidos de la Unidad Popular contaban con 80 representantes sobre un total de 200, lo cual hacía verosímil una solución contraria a la candidatura popular: el Congreso Pleno, en uso de sus facultades constitucionales, bien podría haber escamoteado la victoria de Allende eligiendo en su lugar a quien había ocupado el segundo puesto en la votación, Jorge Alessandri. A tales efectos, los sectores más reaccionarios de las clases dominantes se embarcaron en una desembozada campaña tendiente a impedir, a cualquier costo, la elección de Allende: atentados dinamiteros; creación de organizaciones fascistas como Patria y Libertad; pánico financiero desatado por el propio ministro de Hacienda a través de cadena nacional de radio y televisión y el asesinato del comandante en jefe del Ejército General, René Schneider —consumado justamente dos días antes de la sesión del Congreso Pleno que debería elegir al nuevo presidente. A pesar de todo, el 24 de octubre el Parlamento designó a Salvador Allende como presidente constitucional de Chile.

Si el triunfo electoral de la izquierda hubiera sido un “accidente” o el producto de una conjunción puramente superestructural de factores aleatorios entonces hubiera sido posible “reparar” —utilizando los varios mecanismos que la institucionalidad burguesa había previsto para tales casos— el equívoco resultado comicial. Pero esta restauración era impensable en la coyuntura política de 1970, signada por una profunda crisis orgánica y en donde el ascenso impetuoso de las masas populares contrastaba con la profunda escisión producida en el seno de las clases dominantes.<sup>65</sup> Para hacer

<sup>65</sup> Hay que tener en cuenta que el 36.6% de los votos obtenidos por Allende era un reflejo parcial e incompleto del crecimiento del movimiento popular. En las secciones precedentes hemos visto otras manifestaciones no-electorales de este fenómeno

frente a esta situación y preservar la dominación política de la burguesía se requería nada menos que el sacrificio de la Democracia Cristiana. Ésta debía reconocer que su misión histórica —la integración de una alianza “capitalista modernizante” en donde la hegemonía de la burguesía se reforzara con una amplia base de apoyo popular— había concluido en un fracaso y que debía ceder el puesto a los aparatos políticos tradicionales, ahora remozados para adaptarse a las nuevas condiciones en que se libraba el conflicto de clases. Éste y no otro era el significado que tenía la propuesta de elegir a Alessandri o convocar a nuevas elecciones presentando un candidato de “unidad burguesa” para oponerlo a Salvador Allende. Además, ambas proposiciones eran impracticables porque, como en todo periodo de crisis orgánica, se produjo un desfase entre las clases dominantes y sus “representantes políticos”. La dinámica interna de la Democracia Cristiana, influida por la movilización popular, había desplazado a los personeros de la burguesía de la conducción del partido —así como del control de su base electoral. Por el contrario, los sectores que lo gobernaban —de extracción pequeñoburguesa— llevaron su autonomía hasta el extremo de rechazar abiertamente cualquier entendimiento con “la derecha” y que pudiera resultar en un desconocimiento de la victoria de Allende. Naturalmente, esto no significaba que se solidarizaran plenamente con la izquierda (recuérdese el “estatuto de garantías democráticas”, etc.) sino que como partido, la Democracia Cristiana prefería negociar con la Unidad Popular y no con el Partido Nacional. En otras palabras, el aparato político de la burguesía ya no respondía a la voluntad de ésta y las clases dominantes, divididas por antagonismos estructurales agravaron su debilidad a raíz de que la dirección pequeñoburguesa de la Democracia Cristiana impedía todo compromiso con la derecha, aun en momentos críticos, cuando un “acuerdo defensivo” era la única salida.

La “crisis orgánica” de la dominación burguesa requería entonces una serie de reajustes que no podían producirse de la noche a la mañana y entre tanto, ya las clases populares habían cruzado el Rubicón e inaugura-

que sería conveniente recordar a la hora de aquilatar el significado real de ese guarnismo. Además, no hay que olvidar que una buena parte del electorado que votó en favor de Radomiro Tomic lo hizo atraído por un programa que, en sus intenciones al menos, era muy similar al enarbolado por la Unidad Popular. Un importante segmento de campesinos, pobladores —y en mucho menor escala, obreros— votaron por Tomic y muchos de ellos, luego del triunfo de Allende y de la puesta en marcha del programa de gobierno de la UP, se plegaron a las filas de la izquierda. Sólo así se explica que, a pesar de las difícilísimas circunstancias en que se realizó la elección de 1973, los partidos oficialistas hayan aumentado sensiblemente su votación.

do su experiencia de gobierno. Hacía falta reagrupar los efectivos dispersos de las clases dominantes, organizarlos nuevamente y crear las condiciones propicias para contener y rechazar el avance del proletariado. Se hacía indispensable descartar hombres y viejos dirigentes que habían flaqueado en los momentos decisivos; había que desechar partidos y organizaciones obsoletas para la nueva etapa de la lucha de clases; había que abandonar las tácticas parlamentarias, el compromiso y la oposición franca. Se requerían nuevos hombres, nuevos aparatos políticos, otros métodos de acción, y esto tomaría su tiempo. A principios de octubre de 1972, con la huelga de los gremios patronales (principalmente camioneros y pequeños comerciantes) las clases dominantes probarían a fondo su nueva estrategia para recuperar el control del Estado. Las cercanas elecciones de marzo de 1973, sin embargo, abrieron un paréntesis en donde los aparatos políticos tradicionales de las clases dominantes trataron de derrocar al gobierno sin violar las "sacrosantas" instituciones de la democracia liberal. Sin embargo, la acrecentada votación izquierdista demostró que no serían precisamente las elecciones populares las que habrían de provocar la caída del gobierno de Allende. La misma noche en que el pueblo festejaba por las calles la nueva victoria de la Unidad Popular, las clases dominantes llegaban a la conclusión de que, para salvar su dominación de clase, era necesario destruir a la democracia burguesa.